

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: No. 25000-23-41-000-2016-02200-00
Demandante: FUNDACIÓN YUMANÁ
Demandado: AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)
Referencia: ACCIÓN POPULAR

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 66 cdno. ppal.) dado que la demanda de la referencia cumple con los requisitos legales consagrados en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998 y el inciso tercero del artículo 144 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo **admítase en primera instancia** y en consecuencia **dispónese:**

1º) Notifíquese personalmente esta decisión al Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o a quien haga sus veces, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 472 de 1998, haciéndole entrega de copia de la demanda y de sus anexos.

2º) Adviértasele al demandado que dispone de un término de diez (10) días contados a partir de la notificación personal de esta providencia para contestar la demanda y solicitar la práctica de las pruebas que pretenda hacer valer en el proceso; asimismo **hágasele** saber que la decisión que corresponda adoptar en este asunto será proferida en los términos que establece la Ley 472 de 1998.

Expediente No. 25000-23-41-000-2015-002200-00
Actor: Fundación Yumaná
Acción popular

3º) Para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 472 de 1998 **notifíquese** esta providencia a la Defensoría del Pueblo y **remítase** a esa entidad copia de la demanda y del auto admisorio de la misma para el registro de que trata el artículo 80 de dicha disposición legal.

4º) A costa de la parte actora **infórmese** a la comunidad en general a través de un medio escrito masivo de comunicación de amplia circulación o en una radioemisora de amplia difusión dentro del territorio Nacional, lo siguiente:

"Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, expediente A.P. 25000-23-41-000-2016-02200-00, adelanta una acción popular como consecuencia de la demanda presentada por la Fundación Yumaná contra la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos relativos al goce de un ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, los que estima amenazados como consecuencia del desarrollo del proyecto hidroeléctrico Porvenir II en la cuenca hídrica de Samaná del Norte, acción popular que fue admitida mediante auto de quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)".

Prueba de la anterior comunicación deberá ser allegada al expediente en el término de tres (3) días.

5º) **Notifíquese** al agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 43 de la Ley 472 de 1998.

Expediente No. 25000-23-41-000-2015-002200-00
Actor: Fundación Yumaná
Acción popular

6º) **Notifíquese** personalmente al director general o al representante delegado para el efecto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012.

7º) **Comuníquese** la admisión de la demanda a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en calidad de entidades administrativas encargadas de proteger los derechos colectivos alegados como vulnerados, en los términos establecidos en el inciso final del artículo 21 de la Ley 472 de 1998.

8º) Ejecutoriado este proveído y cumplido lo anterior, **regrese** el expediente al Despacho para continuar con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B

Bogotá, DC, quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: No. 25000-23-41-000-2016-02200-00
Demandante: FUNDACIÓN YUMANÁ
Demandado: AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES (ANLA)
Referencia: ACCIÓN POPULAR – MEDIDA CAUTELAR

En atención a la solicitud de medida cautelar pedida por la parte actora en el escrito de la demanda de la acción popular de la referencia **dispónese**:

1º) De la solicitud de medidas cautelares formulada por la parte actora, por secretaría córrase traslado por el término de cinco (5) días al Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Código Contencioso Administrativo, norma esta aplicable en virtud de preceptuado en el parágrafo del artículo 229 *ibidem*.

2º) Cumplido lo anterior **regrese** el expediente al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado



Respetado Magistrado Ponente,

La Fundación Yumaná con Número de Identificación Tributaria No. XXXX, representada legalmente por JULES MATTHIEU DOMINE con C.E 470. 178 con notificación en la dirección Calle 48 B No. 10 Sur101 del Municipio de Medellín me permito manifestar, que por medio del presente escrito, interpongo Acción Popular, para buscar la protección de los derechos e intereses colectivos amenazados y vulnerados, para evitar los daños contingentes sobre la riqueza Hídrica, Geológica y Botánica de la Nación, al igual de los presentados a la Población Desplazada por el conflicto armado Colombiano y hacer cesar esta vulneración en el derecho colectivo a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas (4 entes territoriales), así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, desconociendo el proyecto de litigio, los mandatos Constitucionales consagrados en los artículos 8, 79 y 80, donde se establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, consagrada esta acción en el artículo 88 de la Constitución Política y literales a), c), y m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. La presente, se dirige contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como ente encargado de velar por la protección de los ecosistemas nacionales y el equilibrio ecológico, creada por Decreto 3573 de septiembre 27 de 2011, como institución del Estado que tramita requisito de licencia en un proyecto de impacto ambiental, representada por el señor RODRIGO SUÁREZ CASTAÑO y domiciliada en Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca.

ARTICULO 79. CARTA MAGNA

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.

FUNDAMENTOS PARA SUSTENTAR LA INMINENCIA DEL RIESGO Y PÉRDIDA DEFINITIVA DEL ECOSISTEMA - MEDIDA PREVENTIVA COMO MECANISMO INMEDIATO DE PROTECCIÓN Y PRECAUCIÓN

Reza el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, en su literal a): *“Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando”.*

Es inminente el riesgo por el impacto del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, el cual obtuvo licencia ambiental mediante la Resolución 0168 del 13 de febrero de 2015 por parte de la Autoridad Nacional de licencias Ambientales, y la incertidumbre académica y científica, toda vez que se tiene para la consecución de la resolución de licencia ambiental, estudios limitados a pequeñas áreas georreferenciadas dentro del trámite administrativo; entre otros, en lo antropológico y biológico, no alcanzando a cubrir más del 10% del área afectada por la inundación, con repercusiones directas e indirectas sobre la Cuenca Hídrica del Samaná Norte. Por otro lado, existe un compilado que fundamenta la inviabilidad del proyecto y otro que dice lo contrario.¹ Bajo estas incertidumbres acudimos a su despacho para la protección Constitucional y se pueda actuar en oportunidad y habiendo cumplido los recursos de ley.

CONTEXTO

El “Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte – Proyecto Porvenir II”, está catalogado como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico para la generación eléctrica de alrededor de 352 MW - megavatios, cursando más de 27 kilómetros del Cañón y cubriendo alrededor de 1075 hectáreas, que según la clasificación de Holdridge, es de transición entre bosque húmedo tropical (bh-T) y bosque muy húmedo tropical (IGAC, 1977) de gran pluviosidad, [Precipitación anual de 3000-5000 milímetros

¹ Mediante concepto Técnico 603 de febrero 11 de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, emitió concepto positivo para el Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II, sin embargo, fue conocido a través de denuncias públicas y en respuesta a oficio del Senador de la República Jorge Enrique Robledo, que el grupo evaluador designado para el proyecto emitió Concepto Negativo, con fundamento en investigación científica verificada en campo, mientras que el concepto técnico positivo que viabilizó la licencia ambiental fue elaborado en el transcurso de aproximados 3 meses. Los fundamentos técnicos contenidos en el concepto negativo, son el soporte de ciencia para la presente acción.

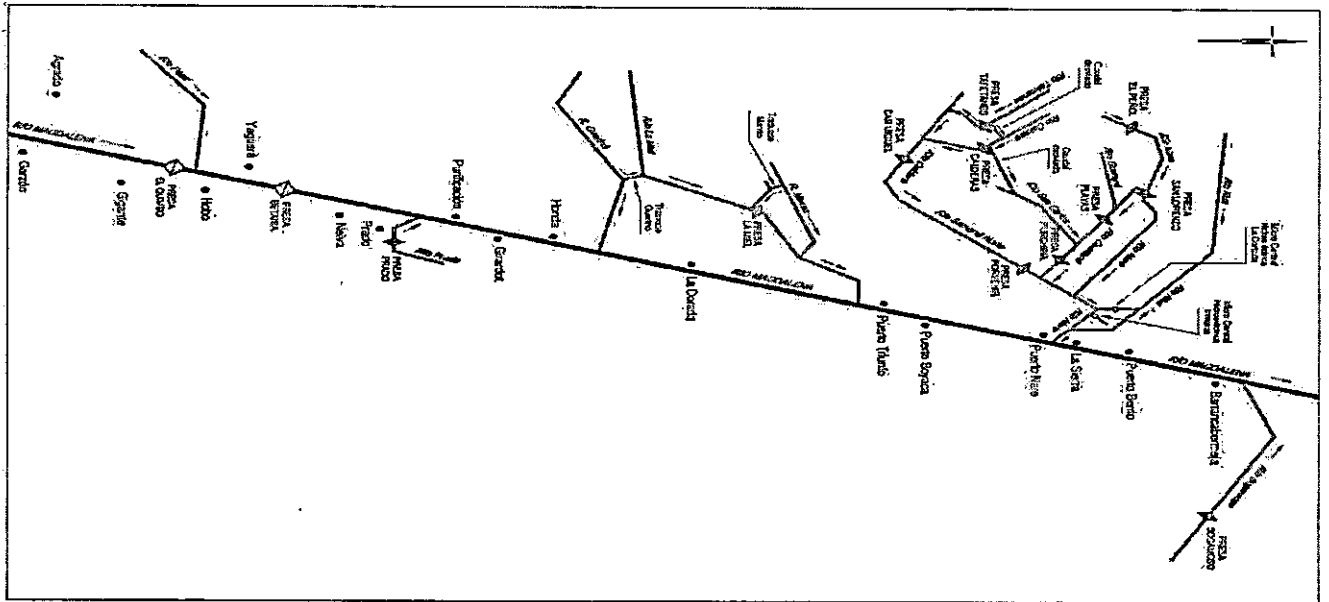
(Hoyos et al 1983)], sobre un cañón profundo y estrecho de las primeras eras geológicas (Pleistoceno), que le cruza una de las dos venas kársticas que posee la geografía Colombiana, trayendo consigo, una zona de alto endemismo, riqueza biológica, botánica y cultural (Hallazgos Arqueológicos), que sería cubierta por una presa de 140 metros de altura.

San Carlos, San Luis, Caracolí y Puerto Nare, municipios del Departamento de Antioquia, son los territorios de la jurisdicción del proyecto: Zonas estas, en procesos de ley 1448 de 2011 para la reparación integral de víctimas por el conflicto armado, debido al gran nivel de afectación que tuvieron estos territorios y sus habitantes en sus derechos fundamentales y colectivos. Vale recordar en reciente fallo de Constitucionalidad, la Honorable Corte, mediante Sentencia No. C-035 de 2016, dispone la importancia de los derechos de las víctimas por encima de los mismos Proyectos de Interés Nacional –PINE-, así: *“Así, la Sala advierte que el derecho a la reparación integral es una noción que no sólo deviene del sistema jurídico colombiano, sino que ha sido ampliamente reconocida por el derecho internacional como una obligación que debe ser observada por parte de los Estados”*.

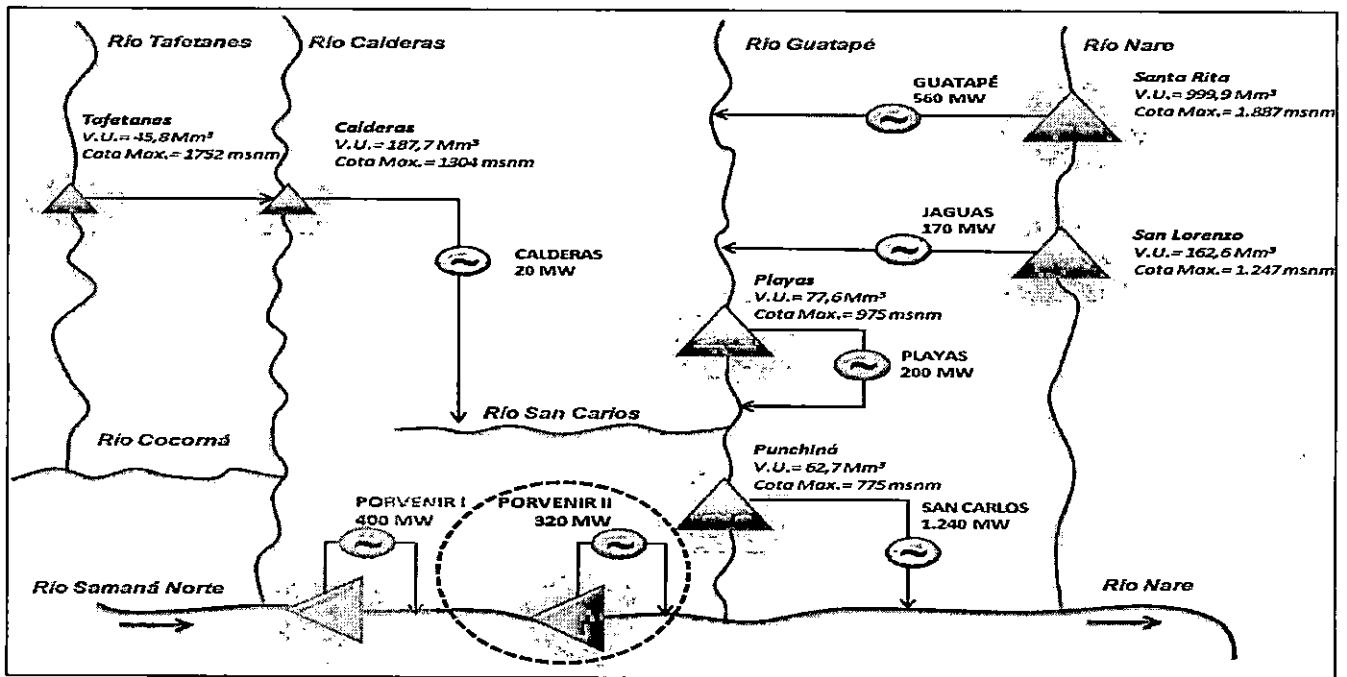
EQUILIBRIO ECOLÓGICO; CONFLICTO SOBRE EL INTERÉS COLECTIVO, PERSPECTIVA BIÓTICA Y FÍSICA

Existe una vulneración del Derecho Colectivo Invocado para la conservación del equilibrio ecológico, que contempla su defensa a través de esta Ley 472 de 1998. Para identificar el objeto de protección, se analiza desde la cuenca del Río Magdalena y la Cuenca del Río Samaná Norte, en este caso vistas desde la intervención con otras centrales de energía.

Proyectos Hidroeléctricos en la Cuenca del Río Magdalena



Proyectos Hidroeléctricos en la Cuenca del Río Samaná Norte



El área de cuenca intervenida por la cadena de embalses Nare-Guatapé es de 2247 Km² que corresponden al 39,5% del área total de la cuenca hasta su desembocadura en el río Magdalena. Tras la eventual construcción del Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II el área intervenida alcanzaría 4.180 Km² que representan un 73,45% del área total de la cuenca, generando pérdidas adicionales de conectividad y funcionalidad ecosistémica.

“El concepto de desarrollo sostenible ha sido uno de los pilares fundamentales de los distintos tratados y conferencias internacionales sobre el ambiente desde 1987 en adelante. En ese año, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo presentó una primera aproximación sobre este concepto, según el cual el desarrollo sostenible es “aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” En esa medida, el concepto de desarrollo sostenible gira en torno al equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la preservación de los recursos naturales, perspectiva de desarrollo que fue recogida en el artículo 80 de nuestra Constitución”. Sentencia C-035 de 2016.

IMPACTOS BIÓTICOS Y FÍSICOS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO "PORVENIR II" SOBRE LA CUENCA DEL RÍO SAMANÁ NORTE

1. El proyecto generaría impactos ambientales sobre un ecosistema de importancia regional y nacional. Entre los argumentos expuestos se destaca que la cuenca del Río Samaná Norte es un enclave que pertenece a la provincia biogeográfica Chocó-Magdalena, que es reconocida como un refugio húmedo del pleistoceno en donde han ocurrido importantes procesos de especiación y de intercambio biótico y que además sobresale por ser un área de confluencia de especies del alto valle del Magdalena con especies de las llanuras de la Orinoquia y Amazonia, razón por la cual, en esta zona la fauna presenta un alto grado de endemismo, argumento confirmado por la Empresa en la información presentada para su evaluación a través de los estudios de impacto ambiental (Expediente LAM 4697 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales).
2. Es así como para el ecosistema terrestre se identificaron 47 especies de flora en el Área de Influencia Indirecta (a partir de información secundaria) con distribución endémica para la región de la vertiente oriental de la cordillera central de los Andes de Colombia de las cuales diecisiete especies están en alguna categoría de amenaza a nivel nacional y una a nivel regional, cuatro de ellas en peligro crítico (CR), *Aiphanes leiostachys*, *Caryodaphnopsis cogolloi*, comino crespo (*Aniba perutilis*) y abarco (*Cariniana pyriformis*) de alto valor económico, siete en peligro (EN), una de ellas se encuentra en el apéndice II del CITES (*Cedrela odorata*), seis en categoría vulnerable (VU) y la especie *Caryodaphnopsis cogolloi* van der Werff, conocida únicamente en una localidad en el cañón del Río Claro (Libro Rojo de Especies Maderables, V4), reserva natural El Refugio, entre 320-520 msnm cuya extensión de presencia es menor a 100 Km². En cuanto a la fauna se reportan 273 especies de aves de las cuales se registran 7 endémicas y 4 casi endémicas, 4 casi amenazadas (NT), 1 en peligro crítico (CR), 2 en peligro (EN) y una vulnerable (VU), 106 especies de mamíferos, una especie en CITES II una en CITES III, 4 vulnerables (VU) y la especie *Ateles hybridus brunneus* en peligro crítico (CR), siendo este último considerado -según lo reportado por la Empresa- "*uno de los 25 primates más amenazados del mundo y además es endémico de Colombia el cual presenta un área de distribución muy reducida (...) razón por la cual el cuidado de sus poblaciones es primordial para la conservación de la especie*"; 50 especies de anfibios, una vulnerable (VU), una de menor preocupación (LR) y según la Empresa "*11 de las especies listadas son endémicas de Colombia, específicamente de la región Andina, esto quiere decir que su distribución se restringe a las cordilleras y los valles interandinos*". Finalmente para los reptiles

se registran 33 especies de las cuales la boa (*Boa constrictor*) hace parte del apéndice II del CITES, *Anolis antonii* es una especie endémica de Colombia, con distribución restringida a la región Andina, y *Anolis vittigerus* es casi endémica. Sumado a esto, según estudios reportados por ISAGEN, dentro del programa “Actualización de los inventarios de especies de fauna terrestre”, del PMA de la central San Carlos (marzo de 2013), en el área de influencia se han registrado 454 especies de las cuales 18 son especies endémicas para Colombia, 11 de anfibios, 1 reptil, 2 mamíferos y 4 aves.

De acuerdo con lo anterior, es imperativa la conservación de los ecosistemas presentes en el área de influencia del proyecto, de tal forma que permitan el sostenimiento del hábitat y la conectividad para las poblaciones de fauna encontradas, especialmente las catalogadas en alguna categoría de peligro, si se tiene en cuenta que son especies que enfrentan diferentes niveles de riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado silvestre debido a la reducción del tamaño poblacional y arenales pequeños o fragmentados en disminución, por afectación o destrucción de hábitats.

3. En el AID se reportan riquezas de 302 especies en bosque fragmentado y 233 especies para vegetación secundaria y un total de 673 especies de flora (individuos arbóreos) dentro de las cuales se registraron 22 especies en alguna categoría de peligro, veda o endemismo dentro de las cuales se reportan 2 en peligro crítico (CR), 6 en peligro y 6 vulnerables, siendo las dos primeras especies que han sido sobreexplotadas y cuyas poblaciones han sufrido reducciones drásticas superiores al 80%, lo que confirma una vez más que *“el cañón del Samaná Norte es considerado una zona ecológicamente frágil que además hace parte de la zona de endemismo del Nechí, con numerosas especies animales y vegetales exclusivas”*. Adicionalmente se registran 42 especies de musgos, 72 de epífitas vasculares de las cuales una especie está en peligro crítico (CR) y 17 especies (de un total de 30) de orquídeas reportadas en el Apéndice II del CITES. Para el grupo de fauna se obtuvieron registros de 64 especies de mamíferos, 273 especies de aves, 33 de anfibios y 35 de reptiles, de los cuales se identificaron 4 especies vulnerables (VU), una en peligro (EN), una casi amenazada (NT), 3 de preocupación menor (LC) y 22 especies de aves migratorias (que utilizan la zona como ruta de paso).
4. Adicionalmente es importante mencionar que para especies como la nutria (*Lontra longicaudus* - VU) los estudios se realizaron sobre las quebradas La Miranda, Quebradón y Serranías, entre el 20 de noviembre y 6 de diciembre de 2013 y entre el 14 y el 27 de enero de 2014, lo que de acuerdo con lo expresado

por la Empresa, no es suficiente para establecer tamaño efectivo y dinámica de las poblaciones, pues no abarca diferentes períodos climáticos.

5. La intervención del Río Samaná Norte generaría degradación del hábitat y disminución drástica del recurso pesquero (tanto aguas arriba como aguas abajo) causando así una fuerte reducción de las poblaciones existentes e incluso la extinción local de la especie. Así mismo, para el caso de *Capito hypoleucus* (EN), los resultados obtenidos muestran su preferencia por la cobertura de bosque fragmentado y la cobertura en transición entre bosque fragmentado y mosaico de pastos con espacios naturales, El estudio también señala que *“las poblaciones de C. hypoleucus son vulnerables a procesos de extinción por tener rango de distribución restringido (Simberloff, 1994). Esta especie se distribuye en una región que ha sufrido fuertes modificaciones, y pocas medidas de protección, además se ha perdido el 85% de su hábitat original (Múnera y Laverde 2002), especialmente el bosque húmedo tropical. De acuerdo con Múnera et al. (2002), la especie muestra preferencia por ese tipo de hábitat”*, lo que resulta de gran importancia al momento de evaluar los impactos causados por las actividades de proyecto sobre las especies de fauna con alto interés para la conservación.
6. Se debe tener en cuenta además, que en la zonificación ambiental del proyecto se obtuvo para los ecosistemas terrestres que la mayor parte del AID se clasifica como áreas prioritarias para la conservación, de complejidad estructural y conectividad de importancia ALTA, y con presencia de ecosistemas terrestres que permiten la conectividad (desplazamiento y dispersión de individuos) y presentan alta diversidad. Por otra parte, los ecosistemas acuáticos se zonificaron de acuerdo con la riqueza y diversidad de sus comunidades, por lo que tanto el Río Samaná Norte como sus afluentes se clasificaron de importancia ALTA, por lo que se concluye que la construcción y entrada en operación del proyecto Porvenir II pone en riesgo las funciones ecológicas, la conectividad y la estabilidad de los ecosistemas a intervenir, generando así la fragmentación de los mismos, la pérdida de biodiversidad, transformación de ecosistemas y afectación de especies tanto de flora como de fauna con alto valor de conservación, que en algunos casos (ecosistemas acuáticos, afectación de especies endémicas o en peligro crítico) son irreversibles.
7. El Río Samaná Norte es un río dotado de altos valores ambientales, pero sumamente frágiles, sobre los que se concentran actuaciones impactantes, como es el caso del complejo hidroeléctrico Nare-Guatapé, Micro central hidroeléctrica Inmarco, Micro central hidroeléctrica La Cortada y la Central Hidroeléctrica Calderas; convirtiéndolo en el único río de la cuenca sin presa y con la capacidad

de absorber y amortiguar los cambios abióticos y bióticos ocasionados por la operación de los mencionados proyectos. Por lo tanto, la construcción y puesta en operación del Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II, pondría seriamente en peligro la estabilidad de los bienes y servicios ambientales que proporciona la cuenca del río Samaná Norte. Igualmente la alteración del régimen natural de caudales sólidos y líquidos con la construcción del Proyecto alcanzaría niveles de alteración hidrológicas mayores a los actuales, lo que afectaría notablemente a las comunidades hidrobiológicas aguas abajo de la presa, principalmente a la comunidad íctica, en lo que se refiere a modificación principalmente de los patrones migratorios y rendimientos pesqueros. Con la construcción del embalse Porvenir II se originarán cambios sustanciales en el ecosistema fluvial entre ellos la *“Modificación de patrones migratorios de especies y cambios en las estrategias de pesca y de los rendimientos pesqueros aguas abajo del embalse”*. Por lo tanto, la construcción y operación del Proyecto afectaría notablemente la estabilidad estructural y funcional de la cuenca del río Samaná, situación que no podría ser mitigada ni compensada a través de la implementación de medidas de manejo ambiental.

8. El Río Samaná Norte es el único río no afectado por barreras artificiales tipo presa que existe en esta cuenca y es utilizado por especies migratorias de alta importancia biológica, comercial y cultural, así como por las especies endémicas de la cuenca Magdalena-Cauca, de tal forma que no resulta viable su intervención, dado que además de albergar especies protegidas (endémicas y en las categorías de amenaza vulnerable-VU, en peligro crítico-CR y en peligro-EN) presentes en el cuerpo de agua a intervenir y la diversidad que éste presenta, en la cuenca del Samaná Norte no hay cuerpos de agua que estén en capacidad de absorber las perturbaciones existentes sumadas a las de un nuevo proyecto hidroeléctrico.

9. De acuerdo con la comunicación 4120-E1-51797 del 25 de septiembre de 2014, la AUNAP considera que *“La construcción de una hidroeléctrica en los tributarios del río Magdalena, afectan de manera diferencial a las especies dependiendo de su dinámica reproductiva, teniendo en cuenta que estos tributarios son hábitats naturales de algunas especies de aguas torrentosas como la picuda *Salminus affinis*, sabaleta *Brycon henni*, pataló *Ichthyolephas longirostris*, y para el bocachico *Prochilodus magdalenae* y la dorada *Brycon moorei* que logran remontar estos ríos en la subienda, la represa constituye una barrera para su ciclo reproductivo y debido a las modificaciones asociadas a la represa, es muy posible que estas especies tiendan a desaparecer aguas arriba. (...) En la*

planicie cercana a la desembocadura, el río Nare (Samaná Norte) como es conocido en la zona, es muy importante para la economía de la región, sostiene una población importante de pescadores permanentes, pero en la temporada de subienda sostiene a aproximadamente 1.200 pescadores provenientes del municipio de Puerto Nare, Puerto Serviez, Puerto Boyacá y Puerto Berrío.(...) Las nuevas condiciones hidrológicas debidas a las fluctuaciones de niveles, dados por la demanda de generación de energía, va a generar impactos negativos sobre la actividad pesquera por desplazamiento de las poblaciones de peces, por tanto disminución de la abundancia y alteraciones del ciclo reproductivo de las especies, igualmente se generará la reducción de hábitats preferentes (rocas y corriente fuerte) aguas abajo, que afectaran especies como la picuda, pataló, dorada y loricaridos en general (...)”.

10. Al embalse entrarán cada año 3.090.720 toneladas de sedimentos, que corresponden a 2.377.477 m³, con una eficiencia de atrapamiento del 80%. De este modo se estimó un volumen de depositación de sedimentos en el embalse al cabo de 50 años de operación de unos 99,1 millones de m³, correspondientes al 100% del transporte de sedimentos gruesos y el 80% de los sedimentos finos. Así pues, la capacidad de sedimentación del embalse ejerce un efecto barrera al transporte de semillas, las cuales, son importantes para la alimentación de los peces, en la medida que en la parte media de la cuenca las semillas constituyen el ítem de mayor consumo (62.54%) y en la parte baja ocupa el segundo lugar (22.66%). De igual forma, de acuerdo con los resultados presentados por la Empresa, a nivel general, la mayor diversidad de especies de macroinvertebrados se encuentra aguas arriba del sitio de presa, de tal forma que el cambio a un sistema léntico interrumpiría la deriva de los macroinvertebrados, afectando incluso las poblaciones de la parte media y baja de la cuenca, así como los peces reófilos del AID.

De igual forma, es evidente que la depositación del 100% del transporte de sedimentos gruesos y el 80% de los sedimentos finos, implica la suspensión en el aporte de sedimentos aprovechables para minería aguas abajo del sitio de presa, condición que debe ser valorada en el medio socioeconómico y que dista sustancialmente de lo planteado por la Empresa en la Tabla 4 del Anexo de Caudal Ambiental: el impacto sobre la minería será positivo porque *“permite mayores áreas de trabajo y reduce el riesgo de daño de las herramientas y equipos de trabajo”*.

11. Los ríos Nare y Nus *“se encuentran regulados por la cadena de embalses cercanos a la zona de estudio, por lo que el aporte de sedimentos no es significativo al ser comparada con el que alcanza a transportar el río Samaná*

Norte aun considerando el funcionamiento de Porvenir II", de tal forma la carga de sedimentos aportada por estos ríos no compensa de ninguna manera el aumento de capacidad erosiva del río Samaná, en especial si se tiene en cuenta que los embalses del complejo hidroeléctrico Nare-Guatapé *retienen la mayor cantidad de sólidos que transporta el río de tal forma que "la descarga del embalse Punchiná, presenta la mejor calidad del agua del país"* al estar libre de sedimentos. Así pues, la retención de sedimentos en el embalse promoverá que durante los primeros años (1 a 10 años) de operación del Proyecto desaparezcan progresivamente las barras de sedimento existentes y se suspenda el aporte de sedimentos hacia aguas abajo, afectando la minería, el turismo y la recreación. De igual forma, se presentaran procesos erosivos locales inmediatamente aguas abajo de las confluencias con los ríos Nare y Nus así como en el puente Ferrocarril y el corregimiento La Pesca, potenciando de esta manera impactos sobre la infraestructura económica y comunitaria, lo anterior sin considerar las inconsistencias en las hipótesis bajo las cuales se adelantó la modelación. En este sentido, en la medida que el lecho del Río Samaná se compone de materiales susceptibles de ponerse en movimiento, la degradación del lecho será de mayor magnitud a la reportada por el modelo desarrollado por la Empresa, la manifestación del impacto se presentará hacia aguas abajo de Puerto Garza (corregimiento de San Carlos) (entre el sitio de presa y este punto puede asumirse la existencia de un lecho acorazado), especialmente entre Canteras y el Río Magdalena, afectando bienes públicos y privados y al respecto no hay una medida de manejo que prevenga, mitigue, corrija o compense el impacto.

12. En cuanto a la calidad del río aguas abajo del sitio de presa, los resultados del modelo son claros en evidenciar que por lo menos durante los 3 primeros años de operación la concentración de OD será menor a 4 mg/l a menos que se suministre aire por mecanismos artificiales. Adicionalmente, la Empresa asume que en todo momento el agua turbinada por el proyecto se mezclará con las aguas descargadas por la central San Carlos (hidroeléctrica de la empresa ISAGEN sobre el Río San Carlos), condición que no puede ser controlada ni garantizada por el proyecto Porvenir II. Al respecto, asumiendo que efectivamente se logre recuperar niveles de OD iguales o superiores a 4 mg/l producto de la aireación artificial o de la mezcla con las aguas turbinadas por la central San Carlos, la Empresa no valora el impacto ocasionado por la descarga de aguas con temperaturas bajas (21,5 a 22°C), considerablemente inferiores a la temperatura del río según la línea base (25,5°C en la estación Sitio de Presa), lo que constituye una limitante para el establecimiento de especies ícticas. En este sentido es de esperar que las poblaciones de peces se vean disminuidas especialmente en los primeros kilómetros aguas abajo del sitio de presa, sector

en el cual precisamente la Empresa propone realizar la captura de individuos para ser trasladados hacia aguas arriba.

13. En relación con la valoración del impacto "alteración de la dinámica y disponibilidad del agua superficial" durante el llenado del embalse y el 25% del tiempo en la etapa de operación, el caudal ambiental que será suministrado producirá niveles mínimos extremos con porcentajes de excedencia superiores al 98%, situación que se agrava si se tiene en cuenta que el coeficiente de rugosidad utilizado en el modelo hidráulico hasta la sección de Muros ($n = 0.065$) corresponde a un cauce con "*malezas densas, tan altas como la profundidad del río²*" situación que no coincide con las condiciones del lecho del río Samaná consistente en "*cascajos y guijarros de gran tamaño*" con taludes en roca desprovista de vegetación hasta el nivel medio del río, lo que implica que los niveles evaluados con el modelo hidráulico se incrementan respecto a la condición real en la cual seguramente se presentarán niveles menores a los modelados y aunque la Empresa manifiesta que una vez se termine el llenado el caudal medio del Río Samaná Norte volverá a estar disponible, es preciso aclarar que en términos de caudales diarios y horarios la dinámica del río nunca será igual a la natural, exhibiendo una alta variabilidad.

En este mismo sentido, la alteración en la disponibilidad del recurso durante operación del embalse no se limita al tramo comprendido entre el sitio de presa y el río Magdalena, por el contrario se extiende en toda el área a inundar donde la Empresa propone restringir tanto el acceso como la navegación y la pesca en el embalse, y su manifestación no corresponde únicamente con incrementos y descensos periódicos de los caudales y niveles, sino que implica la limitación de acceso al recurso producto de la alteración en su calidad (bajos niveles de OD, bajas temperaturas y bajo contenido de sólidos) tanto durante el llenado como durante la operación, lo que a su vez propicia impactos indirectos sobre el turismo, la recreación, la pesca y la minería, actividades que constituyen el sustento de la mayor parte de la población del AID. Este impacto adquiere una valoración como Crítico.

14. En la determinación de caudal ambiental se identificaron las siguientes inconsistencias: No existe correlación alguna entre las curvas de duración de caudales sin y con Proyecto, en la medida que no reflejan los caudales naturales de mayor magnitud (entre $350 \text{ m}^3/\text{s}$ y $700 \text{ m}^3/\text{s}$), ni la operación con caudal ambiental ($74 \text{ m}^3/\text{s}$) el 25% del tiempo, ni la operación con caudal de diseño ($297 \text{ m}^3/\text{s}$) el 45% del tiempo; El índice de Integridad de Hábitat (IIH) fue calculado con

² Ven Te Chow, 2004. Hidráulica de Canales Abiertos. Editorial Mc Graw Hill, Illinois.

la serie de caudales medios mensuales natural (Sin Proyecto) y la serie de caudales medios mensuales Con Proyecto, contrario a lo estipulado en la metodología de caudal ambiental según la cual *"El IIH se calcula para las condiciones sin y con proyecto para los caudales medios mensuales y los caudales ambientales de la propuesta hidrológica inicial"* (UNAL-MADS, 2008).

Así las cosas, podemos evidenciar un alto riesgo de perder las cadenas ecológicas completas de la cuenca, con la realización de la obra si tenemos presente el alto nivel de intervención de la cuenca Samaná Norte ha generado la acumulación de los impactos en a) Interrupción de rutas migratorias, b) Pérdida de conectividad entre el río Samaná y sus afluentes, c) Disminución de poblaciones de fauna y flora, d) Riesgo de extinción local de especies amenazadas o en peligro, e) Alteración del régimen de niveles y caudales en el Río Samaná Norte, que ha llevado a restricciones para sus usuarios.

15. El cauce del río Samaná Norte es el único que amortigua las perturbaciones de la cuenca, soporta el recurso hidrobiológico y constituye el sustento para la mayor parte de la población (minería de barequeo y pescadores) que ya no puede ejercer su actividad en afluentes vecinos.
16. El potencial embalse del proyecto hidroeléctrico ocuparía la zona denominada como el Carso de Samaná que según los estudios presentados parece haber sido ignorado por la empresa a cargo del diseño. En el área referenciada se evidencia un drenaje subterráneo, cuya manifestación evidente son las numerosas cavernas, algunas de ellas conocidas y exploradas por los habitantes de la zona.
17. La fase de exploración en el marco del estudio de impacto ambiental estuvo orientada a identificar sólo las condiciones de cimentación de la presa desconociendo el ambiente cársico del vaso del embalse. La empresa no tuvo en cuenta que para explorar adecuadamente el vaso del embalse es necesario hacer geología de detalle acompañada de exploración geofísica con tomografía eléctrica tridimensional que permita identificar, localizar y caracterizar los canales subterráneos.

PERDIDAS INMEDIATAS ECOSISTÉMICAS

Con el proyecto Porvenir II, la fragmentación y los impactos acumulativos y sinérgicos sobre la oferta ambiental de la cuenca del río Samaná Norte no serán asimilables por ningún afluente y ***ocasionarán la pérdida en la funcionalidad ecosistémica y la pérdida de los medios de sustento de la mayor parte de la población caracterizada por alta vulnerabilidad.***

- A. La pérdida en la biodiversidad de ecosistemas acuáticos (*hidrobiológicos*) y terrestres, incluyendo especies endémicas y con alto valor de conservación (*flora, mamíferos, anfibios, aves, reptiles y peces*) conlleva a una probable extinción local de especies. El Ingeniero Hidrólogo Francés, Jules Domine, cuenta con una investigación sobre el reducimiento de capacidad del proyecto por la calidad de la roca en algunos sectores, ayudando además a nutrir una posible cadena hídrica subterránea que corre debajo del Río Samaná Norte.
- B. El área intervenida alcanzaría 4.180 Km² que representan un 73,45% del área total de la cuenca, generando pérdidas adicionales de conectividad y funcionalidad ecosistémica.
- C. Aislamiento de la cuenca, disminución de poblaciones hidrobiológicas y por consiguiente pérdida de biodiversidad.
- D. De las 55 especies ícticas reportadas para el AID del Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II, el 58,2% son especies endémicas de la cuenca Magdalena-Cauca, y 15 son migratorias (27,3%), de las cuales nueve (9) se encuentran en alguna categoría de amenaza (*i.e.* susceptible de extinguirse en un futuro próximo).
- E. El embalse ejercerá un efecto barrera para el transporte de semillas, las cuales constituyen el ítem de mayor consumo para los peces de la cuenca media (62.54%) y el segundo en la cuenca baja (22.66%).
- F. La operación de Porvenir II incrementará la alteración hidrológica ocasionada por la cadena de proyectos Nare-Guatapé, de tal forma que en Puerto Garza (San Carlos – Antioquia) el cambio máximo de nivel horario será de 3,4 m (1,2 m mayor al que se presenta actualmente). A nivel diario, en el sector de Muros se alcanza un cambio de nivel de hasta 5,58 m, superando en 3,19 m la variación inducida por San Carlos (pasa de 0,62 m/min a 1,21 m/min). Como consecuencia F.1) Se modifican las señales hidrológicas para las especies migratorias en cuanto a la época apropiada para realizar el desove y F.2) Se incrementan las restricciones para los distintos usuarios del río (pescadores, mineros, turistas y transporte fluvial).

G. Cambio total del uso del suelo en las áreas a intervenir, lo que conlleva a la destrucción total del hábitat de 673 especies de flora distribuidas en 103 familias, de las cuales hay **22 con alto valor de conservación**; 64 especies de mamíferos, 273 especies de aves (**2 endémicas**), 33 de anfibios (**3 endémicas**) y 35 de reptiles (**1 endémica**), tala de más de **76.000 individuos de especies arbóreas catalogadas en alguna categoría de peligro** (incluyendo 2 endémicas, 2 en peligro crítico y 5 en peligro), además de afectar especies **endémicas cuya área de distribución no supera los 2 departamentos** (afectación de más de 29.000 individuos). (Concepto Negativo de Viabilidad).

“El cañón del Samaná Norte es considerado una zona ecológicamente frágil que además hace parte de la zona de endemismo del Nechí, con numerosas especies animales y vegetales exclusivas”. CORNARE 2007.

Es importante mencionar que **Los endemismos** se producen por efecto de la combinación de evolución y aislamiento físico en un entorno geográfico determinado, los cuales evolucionan con el tiempo hasta la generación de nuevas especies únicas y exclusivas de una zona, por lo que la reducción de sus hábitats disminuye la capacidad de mantenimiento de las poblaciones existentes.

Por lo tanto, la construcción y puesta en operación del Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II, pondría seriamente en peligro la estabilidad de los bienes y servicios ambientales que proporciona el río Samaná Norte. La presa actuará como una barrera física que perturbará notablemente los flujos de energía, nutrientes y sedimentos, originados en zonas de cabecera y que son necesarios para el desarrollo de los ecosistemas y comunidades hidrobiológicas situados en la parte media y baja de la cuenca. Igualmente, se verían afectados los movimientos migratorios de los peces aguas arriba de la presa, ya sean éstos con fines reproductivos o alimenticios; lo que influye directamente en los volúmenes de producción pesquera.

IMPACTOS SOCIO ECONÓMICOS, CULTURALES Y ARQUEOLÓGICOS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO “PORVENIR II” SOBRE LA CUENCA DEL RÍO SAMANÁ NORTE

1. La participación de la actividad pesquera y minera en el Río Samaná Norte es importante dentro de las ocupaciones de la población del área de influencia directa, al constituir porcentajes mayores al 50% dentro de la población económicamente activa de la mayoría de localidades, aproximadamente 1557

personas deberán cambiar su ocupación, sin considerar la población asentada entre el río Nus y el río Magdalena que también depende de la oferta ambiental del río Samaná Norte. Puntualmente el proyecto relaciona *“1.325 personas que verán afectada su actividad económica asociada al río Samaná Norte, de las cuales 622 personas que ejercen la minería como actividad económica principal, 100 personas que la ejercen como actividad económica complementaria, 417 personas que ejercen la pesca como actividad económica principal (tramo 1 y tramo 2) y 186 personas que realizan la pesca como actividad económica complementaria (tramo 1 y tramo 2) 21 personas que se dedican a la extracción maderera en predios requeridos por el proyecto”*.

2. El 59% de la población actual del área de influencia que corresponde a los municipios de San Carlos y San Luis es retornada. Este proceso de retorno no ha culminado en el área de influencia directa del proyecto, de manera que los impactos socioeconómicos serían mayores a los valorados.
3. A pesar de las cifras citadas, en el momento no se ha identificado la totalidad de población que económicamente se relaciona con el río Samaná Norte, tampoco se incluye a todos los usuarios del río de los tramos 1 y 2, por ejemplo aquellos que pescan en el río Samaná Norte pero residen en el corregimiento de El Jordán y veredas de Paraguas, Juanes de San Carlos, entre otros, que no fueron incluidos para el manejo, pero que están censados, igualmente el proyecto desconoce hacer una compensación a mineros aguas abajo de la presa.
4. Por otra parte los planes de manejo desconocen el impacto sobre la seguridad alimentaria (por proteína animal) de las familias del área de influencia, desconocen dar un manejo a los sitios turísticos y recreativos en función del río Samaná Norte y desconoce cadenas comerciales como tiendas y restaurantes en Puerto Garza que serán impactados por el proyecto ya que dependen de la actividad pesquera.
5. la información allegada al trámite de licencia, muestra que del total de personas a quienes se les aplicó censos de actividades asociadas al río Samaná Norte, hay 95 personas que ejercen la minería de oro mayores de 60 años (el 9,1%); en actividad pesquera se registran 134 personas en un grupo de censos (13,6%) y 2 personas en otro grupo (6,1%), así como en extracción de madera 7 personas son mayores de 60 años (el 13,5%) y que si bien el proyecto propone mayor valor de indemnización, es difícil que el medio laboral tenga capacidad para absorber a dicho grupo de población.

Así las cosas, aunque la población reciba una compensación económica, hay un riesgo latente de que la economía local no ofrezca opciones para que dicha población –al constituir un número importante–, permanezca en el área de influencia y tanto a mediano como a largo plazo la gente abandone el área en búsqueda de oportunidades hacia otros sitios, escenario que ocasionaría un pasivo económico para las localidades del área de influencia, y que potenciaría el arribo de mineros y pescadores a otras cuencas, incrementando así la presión sobre el recurso pesquero, aspecto sobre el cual la medida de manejo propuesta se queda corta y no alcanza efectividad ni sostenibilidad porque propone acciones a corto plazo y escenarios de intervención inciertos dado que hasta el momento no se tienen definidos los proyectos productivos propuestos para los habitantes.

Las oportunidades turísticas y de sostenibilidad por el desarrollo del territorio alrededor de su geografía, son anuladas con la realización y ejecución del proyecto, sin contemplarse al detalle estas afectaciones.

Existe una riqueza histórica y cultural en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, vestigios de Pueblos Nutabe, Emberá y algunos rasgos Tayrona, en zonas cercanas como la Danta, se han hallado elementos y pictogramas que datan certeramente la importancia de los Conos Kársticos que formaron sitios ceremoniales y de formación, hasta el hábitat sobre el área de inundación (Si revisamos detalladamente el anexo arqueológico, observamos la falta de técnica en el levantamiento de la información).

De lo anterior nos quedan los siguientes interrogantes que no se respondieron en el trámite de licencia:

1. ¿Cómo fueron tramitados y aprobados los programas de arqueología preventiva del proyecto Provenir II, tanto para obras principales como para obras menores?.
2. ¿Si para las obras mayores, en este caso el embalse, la intensidad de muestreo es de por lo menos cuatro (4) muestreos por hectárea; ésto, con el fin de garantizar la identificación de todos y cada uno de los vestigios arqueológicos existentes en la totalidad del terreno inundado e impactado por la totalidad de la obra?
3. ¿Si para el área afectada correspondiente a Ecosistemas kársticos (formaciones de mármol), se aplicaron **metodologías específicas**, tales como prospecciones espeleológicas, muestreos sobre superficies verticales, etc., que permitan la

identificación de yacimientos en cuevas, abrigos, cavernas y cañones sobre las áreas de influencia de obras mayores y menores?

4. ¿Si el patrimonio mueble recuperado y las apuestas de socialización y puesta en valor del patrimonio, han tenido en cuenta los *procesos comunitarios de apropiación social del patrimonio cultural* desarrollados en el corregimiento El Prodigio del Municipio de San Luis, Antioquia; y si hay garantía escrita de que los materiales recuperados sean devueltos a las comunidades locales?

VIOLACIÓN A DERECHOS DE VÍCTIMAS COMO DERECHO COLECTIVO AL TERRITORIO

Los ecosistemas se componen de organismos vivos integrados el uno al otro y el ser humano con su cultura, se imprime a una geografía, configurándose como elemento que estructura el resto del ecosistema.

Quienes habitaban el cañón antes de ser desplazados por el conflicto interno armado, poseían unas prácticas y costumbres propias que se fueron deteriorando con la inhabilitación de esta geografía, en la actualidad se realiza una débil reestructuración del tejido, que es puesta en peligro por la intervención del proyecto.

Los asentamientos humanos ubicados en la cuenca del Río Samaná Norte como parte esencial de ésta ven afectados sus derechos, que si bien no se encuentran taxativamente señalados en la Normativa que regula esta materia como derechos colectivos, sí se verían seriamente afectados colectivamente con la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Porvenir 2, en tanto luego del conflicto armado que vivieron los territorios y poblaciones del área de influencia del proyecto, la llegada del proyecto desestabilizaría el proyecto de vida que en estos momentos se encuentran reconstruyendo las comunidades; violando el derecho a la estabilización socioeconómica que tienen las víctimas del conflicto armado.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA- otorgó licencia ambiental pese a las continuas observaciones que se hicieron en el proceso de licenciamiento y desconociendo lo establecido en la Sentencia 035 de 2016, cuando la Honorable Corte Constitucional señala: “Así, la Sala advierte que el derecho a la reparación integral es una noción que no sólo deviene del sistema jurídico colombiano, sino que ha sido ampliamente reconocida por el derecho internacional como una obligación que debe ser observada por parte de los Estados”.

(...) “Al incluir una excepción al deber de restitución del Estado y consagrar la compensación como medida principal de reparación se produce una verdadera restricción del derecho a la restitución de las víctimas del conflicto armado. Como se mencionó previamente, este derecho es objeto de una protección constitucional reforzada, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 90, y en los tratados sobre derechos humanos. En particular, están consagrados en tratados ratificados por Colombia, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y el Estatuto de Roma, entre otros. El alcance de la protección constitucional por vía del bloque de constitucionalidad se concreta a través de los Principios Pinheiro y los Principios Deng, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato”.

A continuación los argumentos que sustentan la vulneración del derecho de estas comunidades teniendo en cuenta las irregularidades que se presentaron en el proceso de licenciamiento: El otorgamiento de la licencia ambiental vulnera los derechos de la población víctima del conflicto armado que actualmente se encuentra en proceso de retorno o de reubicación. A demás se transgrede el Derecho colectivo al Medio Ambiente. A continuación la relación de las razones que sustentan esta afirmación.

PRIMERO: Mediante el Auto 062 del 11 de Enero de 2013, la Autoridad Ambiental realizó sendos requerimientos a la empresa solicitante, los cuales no cumplió a cabalidad, y a pesar de esto se otorgó licencia ambiental. A modo de ejemplo, en relación con los derechos de las víctimas del conflicto armado, se cita:

“Incluir un análisis de vulnerabilidad de las familias a desplazar a partir de parámetros como etáreos, discapacidad, sexo, tipos de jefatura, dependencia económica e ingresos, redes de parentesco o vecindad, capacidad de adaptación a patrones culturales y particularmente la vulnerabilidad por el conflicto socio político vivido en la zona, indicando desplazamiento forzado y procesos de retorno. En el caso de identificarse predios abandonados o familias que retornaron, será necesario analizar la situación a profundidad de cara a la Ley 1448 de 2011”.

Indica la empresa en la página 2488 del documento de respuesta al Auto 062 y 917 (por medio del cual se resolvió el recurso interpuesto contra el Auto 062) que no se encontraron predios con viviendas abandonadas o con familias que estén en proceso de retorno actualmente, sino más bien familias que tuvieron algún evento de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado y han regresado a sus predios y viviendas. La empresa desconoce que el hecho de regresar al predio o a la vivienda

implica estar en proceso de retorno, pues éste no se agota con el sólo traslado al lugar de expulsión.

Así las cosas, la Anla otorgó licencia desconociendo lo preceptuado en el artículo 67 de la Ley 1448 de 2011, que al tenor señala:

“ARTÍCULO 67. Cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Cesará la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, cuando la persona víctima de desplazamiento forzado a través de sus propios medios o de los programas establecidos por el Gobierno Nacional, alcance el goce efectivo de sus derechos. Para ello accederá a los componentes de atención integral al que hace referencia la política pública de prevención, protección y atención integral para las víctimas del desplazamiento forzado de acuerdo al artículo 60 de la presente Ley”.

La empresa no cumplió con este requerimiento, en tanto lo solicitado por la Autoridad Ambiental fue analizar la situación de las familias que retornaron de cara a la Ley 1448, lo cual implicaría estudiar a profundidad qué se entiende por cesación de la condición de vulnerabilidad y por goce efectivo de derechos, el cual según el Auto número 116 de 2008 expedido por la Honorable Corte Constitucional se mide de acuerdo a los siguientes indicadores: del derecho a la subsistencia mínima, Salud, educación, vivienda, trabajo, generación de ingresos, retorno y reubicación, vida, integridad, libertad, seguridad, identificación, reunificación familiar, reparación integral, reparación colectiva, indemnización, restitución de tierras, protección y garantías de no repetición, rehabilitación, satisfacción, prevención, protección de tierras, alimentación, Justicia, verdad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores.

SEGUNDO: “Consultar las cifras que por cada unidad territorial del AID maneja el municipio San Carlos y San Luis sobre población desplazada, población retornada, en proceso de retorno o con potencial retorno, de forma que se complemente el análisis demográfico del AID”.

Informó la empresa que para el caso San Carlos no fue posible cumplir a cabalidad con dicho requerimiento, teniendo en cuenta que en la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las víctimas y la Unidad Para la Atención a la Población Desplazada (UCAD) no suministraron la información con los parámetros solicitados por la empresa, en este sentido señalan por ejemplo que de acuerdo a la base de datos entregada por la UCAD, entre los años 1989 y 2013 han retornado 461 personas en las unidades territoriales que hacen parte del área de influencia, así: Prado, gradualito, la

Norcasia, garrucha, las palmas, Miraflores, peñol grande, santa bárbara, puerto garza y Samaná.

La empresa no realizó la caracterización de la población retornada y la Anla no requirió a la empresa para que aplicara una metodología en la cual se pudiera evidenciar las verdaderas dinámicas de retorno de las unidades territoriales del AID, esto es, número de familias que se desplazaron, número de familias retornadas, reubicadas, cuántas de ellas están inscritas en el Registro Único de Población Desplazada o Registro Único de Víctimas, cuál ha sido el avance en el goce efectivo de derechos.

A demás, la Autoridad Ambiental no consideró los otros hechos que sufrieron los municipios que comprenden el área de influencia, esto es, no presentaron estadísticas de homicidios, desaparición forzada, accidentes con minas antipersonas, masacres, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pues la dinámica de desplazamiento forzado y de retorno está íntimamente asociada a estos hechos, requiriéndose consiguientemente un análisis que permita determinar cómo se garantiza el derecho a la verdad, la Justicia y la reparación de los hombres y mujeres víctimas.

TERCERO: La Anla desconoció conceptos jurídicos emitidos por La Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, a pesar de encontrarse debidamente incorporados en el expediente LAM 4697.

Mediante oficio con radicado 201411314260221 del 24 de septiembre de 2014, la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en respuesta a concepto solicitado por la Anla, se pronunció en extenso, sobre el proceso de retorno en el Municipio de San Carlos, concluyendo: "expuesto lo anterior, la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas considera que el proyecto hidroeléctrico Porvenir II no es conveniente, por afectar el proceso de estabilización socioeconómica en el que se ha avanzado".

Posteriormente, luego de que la Anla solicitara aclaración sobre dicho concepto, la Unidad de Víctimas, entregó otro concepto en un sentido diferente bajo el radicado 20154267088171 del 08 de abril de 2015. Indicó: "por lo anterior, con el fin de dar claridad respecto de la respuesta emitida por esta unidad el pasado (24) veinticuatro de septiembre de 2014 mediante radicado Orfeo 201411314260221, se hace énfasis en que no tiene porqué existir discrepancia entre los derechos de las víctimas y el desarrollo del país, tal y como se ha expuesto hasta el momento siempre y cuando se respeten y se garanticen los derechos al retorno y reubicación en condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad".

Este segundo concepto se genera ante la solicitud que hace la ANLA citando un párrafo del primer concepto de la Unidad de Víctimas, párrafo que si nos detenemos a revisar en el escrito no existe. Se explica lo anterior así:

La Anla solicita “alcance a la consulta jurídica, con el propósito que específicamente se aclare lo relacionado con lo siguiente: “... es posible entender que el proyecto hidroeléctrico mencionado puede ser desarrollado, siempre y cuando se tengan en cuenta las condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad en la reubicación de las personas dentro del proceso de retorno, facilitando la superación de la condición de vulnerabilidad y la estabilización socioeconómica de los hogares. Es decir, el proyecto hidroeléctrico Porvenir II, podrá ser desarrollado en el evento de que las personas dentro el proyecto de retorno y reubicación accedan voluntariamente y en condiciones dignas a reubicarse en un lugar distinto con cargo a los recursos del proyecto, en el marco del respeto por su derecho como víctima del conflicto armado”.

Este párrafo transcrito por la Anla no se registra en el concepto inicial.

Debe indicarse que la solicitud de alcance jurídico del primer concepto que hace la Anla se da en el periodo de tiempo que se toma la Anla para dar respuesta a los recursos interpuestos. Ninguno de los conceptos se referenciaron en el acto administrativo por medio del cual se concedió la licencia y en su respectivo concepto técnico de evaluación ambiental número 603 del 11 de febrero de 2015.

CUARTO: La Autoridad Ambiental no consideró el concepto emitido por la Unidad de restitución de tierras con radicado DSC2- 20146028 del 25 de septiembre de 2014, a pesar de que lo cita en la Resolución 0726 del 19 de junio de 2015, que resuelve los recursos interpuestos.

Señaló la Unidad de Restitución de tierras, entre otros, lo siguiente: “por tanto, se contesta la pregunta 1 de su escrito en el sentido de indicar que si en virtud del proyecto hidroeléctrico objeto de la consulta, las autoridades competentes adelantan una eventual inundación de la zona de los municipios en comento, en donde se ubican predios sobre los que hay o llegan a presentarse solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas forzosamente, es claro que esta situación comporta complejidades en el adelantamiento de la identificación de dichos fundos conforme lo ordena la ley 1448 de 2011 y el Decreto 4829 del mismo año. En todo caso, se considera pertinente anotar que son los jueces y magistrados especializados en restitución quienes tienen verdaderas posibilidades e pronunciarse sobre las implicaciones que podrían tener los proyectos hidroeléctricos dentro del proceso de restitución de tierras”.

En este sentido, no se advierte que la Anla haya solicitado a los Jueces de Restitución de Tierras pronunciamiento alguno sobre el particular. O la pregunta sería: ¿correspondería esperar a la inundación de los terrenos para que los Jueces de Restitución de Tierras se pronunciaran mediante sentencia sobre la restitución o no de un predio que ya no es apto para ser restituido?

QUINTO: Mediante la Resolución 0164 del 05 de Junio de 2013 el Ministerio de Minas y Energía “declara de utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II así como los terrenos necesarios para su construcción y protección y se dictan otras disposiciones”.

Con la declaratoria de utilidad pública no sólo se vulnera la Constitución Política de Colombia, sino que se violan flagrantemente los tratados Internacionales que en materia de Derechos Humanos fueron suscritos y ratificados por Colombia (Principios sobre la Restitución de las Vivienda y el Patrimonio de los Refugiados y de las Personas Desplazadas – Naciones Unidas 2005), se violan los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia a la consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia a un retorno voluntario a su lugar de origen (Sección V de la Ley 387 de 1997); así mismo, se viola el derecho de esta población a la recuperación de su tierra y territorio mediante la restitución jurídica y material de su tierra (Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones).

Esta declaratoria de utilidad pública viola flagrantemente el espíritu de la Ley 1448 de 2011; al afirmar que:

“...en el evento que a través de sentencia se acredite que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública e interés social han sido despojados o abandonados forzosamente, y por tanto proceda la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados, se otorgará a la víctima un predio equivalente, o una compensación en los términos del artículo 72 de la Ley 1448 de 2011 y las normas que la modifiquen, aclaren y desarrollen”.

Esta orden de ideas, la compensación establecida en el artículo en mención no sólo viola los principios de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, sino que también genera un detrimento patrimonial al Ministerio de Agricultura – Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – al endosarle al Fondo de la Unidad la obligación de llevar a cabo un proceso de compensación

apartándose de las causales establecidas por el legislador en el Artículo 97 de la Ley 1448 de 2011 y los lineamientos técnicos-legales-administrativos y financieros a los cuales se debe sujetar el Fondo de dicha Unidad, lineamientos que quedaron plenamente establecidos en el Manual Técnico Operativo del FONDO de la Unidad de Restitución de Tierras; toda esta violación en aras de favorecer abiertamente los intereses económicos de los privados; constituyéndose dicha actuación en un defraudación para los intereses de la Nación. Al mismo tiempo, éste procedimiento lo que hace es modificar de forma expresa la Ley 1448 de 2011 y sujetar a los jueces de la república a decretar una compensación por fuera de las causales que le establece la Ley.

A demás la declaratoria de utilidad pública no tuvo en cuenta que el territorio de interés para la construcción del proyecto hidroeléctrico fue un territorio gravemente victimizado por el conflicto armado, donde, el CLAIPD (Comité Local de Atención a la Población Desplazada, ahora, Comité Territorial de Justicia Transicional) de San Carlos expidió las respectivas resoluciones de protección jurídica de las tierras con fundamento en el Decreto 2007 de 2001, "por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 7º., 17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar y se adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación".

SEXTO: Manifestó la empresa en el estudio de impacto ambiental que "1.325 personas que verán afectada su actividad económica asociada al río Samaná Norte, de las cuales 622 personas que ejercen la minería como actividad económica principal, 100 personas que la ejercen como actividad económica complementaria, 417 personas que ejercen la pesca como actividad económica principal (tramo 1 y tramo 2) y 186 personas que realizan la pesca como actividad económica complementaria (tramo 1 y tramo 2) 21 personas que se dedican a la extracción maderera en predios requeridos por el proyecto".

La empresa no identificó la totalidad de la población que económicamente se relaciona con el Río Samaná Norte, tampoco incluyó a todos los usuarios del río de los tramos 1 y 2, por ejemplo aquellos que pescan en el río Samaná Norte pero residen en las veredas El Jordán, Paraguas, Juanes de San Carlos, entre otros, que no fueron incluidos para el manejo, pero que están censados, igualmente el proyecto desconoce hacer una compensación a mineros aguas abajo de la presa. Por otra parte los planes de manejo desconocen el impacto sobre la seguridad alimentaria (por proteína animal) de las familias del área de influencia, desconocen dar un manejo a los sitios turísticos y recreativos en función del río Samaná Norte y desconoce cadenas comerciales como

tiendas y restaurantes en Puerto Garza que serán impactados por el proyecto ya que dependen de la actividad pesquera.

SEPTIMO: El estudio de impacto ambiental no propone una medida para garantizar que a largo plazo no haya empobrecimiento de la población, pues si bien se propone la ejecución de proyectos económicos principalmente agropecuarios que están aún sin definir, el numeral 4.2.4.2. del documento Anexo_04_ZonificacionAmbiental dijo lo siguiente: “la afectación de las posibilidades extractivas en la zona del futuro embalse (tanto de minería como de pesca y extracción de madera) puede ser un factor desestabilizador para algunas familias, especialmente para aquellas que no tienen una actividad económica diversificada (pesca, agricultura, ganadería) (...) no parece haber alternativas económicamente atractivas para buscar ingresos en otros sectores, por cuanto la agricultura es poco productiva, la ganadería es extensiva y las fuentes de empleo son escasas y mal remuneradas. En general, para el personal no calificado solo hay opciones de trabajar al jornal o en la mina de mármol”.

Así las cosas, la inminente – ya existe licencia ambiental en firme y actualmente la empresa CEISIA, actual propietaria del proyecto se encuentra actualizando el censo de afectados y está por definirse el valor de precios para la compra de predios que requiere el proyecto- construcción del proyecto hidroeléctrico desconfiguraría las actuales relaciones que se están construyendo luego de la violación masiva y sistemática de derechos humanos en los municipios de San Carlos, San Luís y Puerto Nare, que generó daños colectivos y por ende requiere una reparación colectiva. Los asentamientos humanos como elemento esencial de la cuenca hidrográfica Samaná Norte serían gravemente afectados con la construcción del proyecto de la referencia, siendo entonces necesario la suspensión del mismo para evitar la violación masiva de derechos, pues como se advirtió arriba este proyecto vulneraría el derecho a la seguridad y soberanía alimentaria, el derecho al trabajo y a permanecer en el territorio. Todo esto finalmente hace parte del derecho macro que estamos alegando en esta Acción Constitucional, cual es el equilibrio ecológico, el cual no puede existir ni ser posible sin la presencia de los seres humanos. Si bien no hay precisiones sobre las personas que tendrían que dejar sus actividades en los territorios que se requieren para la construcción del proyecto, sí es claro que la llegada de este proyecto impacta el territorio y la relación de los seres humanos con el medio ambiente.

VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO

Tenemos la existencia de dos conceptos técnicos en el trámite de otorgamiento de Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico "Provenir II", bajo el LAM 4697, el uno justificado como borrador en respuesta de la ANLA, al senador Jorge Enrique Robledo (Of. 2016004575-2 -1-000 del 09 de febrero de 2016, anexo a esta acción) y que data de argumentación Técnica para negar licencia ambiental. Y un segundo que soporta la aprobación o viabilidad del proyecto hidroeléctrico, concepto técnico 603 del 11 de febrero de 2015. Dada esta contradicción, es que la presente acción se interpone, acudiendo a los soportes que el inicial señala como definitivos para concluir en la pérdida de la conectividad ecológica entre la Cuenca Hidrológica del Río Samaná. Por lo que se requiere la intervención de la academia y la ciencia en este caso, para dirimir la confrontación de información.

Esta situación queda a juicio del honorable Magistrado para develar la fuerte inconsistencia presentada, debido a una justificación centralizada del Desarrollo Sostenible, al que la Honorable Corte se refiere en Sentencia C-035 de 2016:

La Constitución, el Equilibrio Ecológico y su relación con el concepto de desarrollo sostenible.

La Carta Política de 1991 reconoce que el ambiente sano constituye un interés superior. Así, por medio de múltiples disposiciones, el constituyente primario incluyó un bloque de normas que configuran lo que se ha denominado como "Constitución ecológica" o "Constitución verde", en las que se consagran una serie de principios, derechos y deberes enfocados hacia la protección del ambiente y dirigidos a garantizar un modelo de desarrollo sostenible³. En esa medida, por una parte el ambiente sano se

³ En la sentencia T-411 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), la Corte realizó una exposición en la que se sintetizaron las principales normas constitucionales sobre la materia, así: "Preámbulo (vida), 2° (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8° (obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos fundamentales de los niños), 49 (atención de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (la educación para la protección del ambiente), 78 (regulación de la producción y comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81 (prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 215 (emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico), 226 (internacionalización de las relaciones ecológicas), 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las acciones populares como mecanismo de protección del ambiente), 289 (programas de cooperación e integración en zonas fronterizas para la preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos Municipales y patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340 (representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado)".

erige como un derecho de todo ciudadano y, por otra, se impone como un deber del Estado.

Ahora bien, el constituyente consideró necesario consagrar que el ambiente sano es un bien jurídico protegido por la Carta Política, el cual requiere del cumplimiento por parte del Estado de los deberes antes señalados. Por ello, los derechos y las obligaciones ecológicas definidas por la Constitución giran, en gran medida, en torno al concepto de desarrollo sostenible.

El concepto de desarrollo sostenible ha sido uno de los pilares fundamentales de los distintos tratados y conferencias internacionales sobre el ambiente desde 1987 en adelante. En ese año, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo presentó una primera aproximación sobre este concepto, según el cual el desarrollo sostenible es *“aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.”*⁴ En esa medida, el concepto de desarrollo sostenible gira en torno al equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la preservación de los recursos naturales, perspectiva de desarrollo que fue recogida en el artículo 80 de nuestra Constitución.

En concordancia con lo anterior, el concepto de desarrollo sostenible ha sido objeto de pronunciamientos por parte de esta Corporación. La Corte ha dicho lo siguiente sobre este concepto:

*“La Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y actualizado marco normativo en materia ecológica, es armónica con la necesidad mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues no sólo obliga al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales sino que además, al establecer el llamado tríplice económico determinó en él una función social, a la que le es inherente una función ecológica, encaminada a la primacía del interés general y del bienestar comunitario. Del contenido de las disposiciones constitucionales citadas se puede concluir que el Constituyente patrocinó la idea de hacer siempre compatibles el desarrollo económico y el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio ecológico.”*⁵

No obstante lo anterior, el derecho al ambiente sano no es absoluto, ni es de aplicación irrestricta, toda vez que la Carta Política no adopta un modelo puramente conservacionista respecto del medio ambiente. De lo anterior se deduce que existe una tensión entre la protección del ambiente y el desarrollo económico, ya que se trata de bienes jurídicos igualmente protegidos por la Constitución Política, cuyo contenido no es absoluto. Consciente de dicha tensión, al adoptarse el concepto de desarrollo

⁴ Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU. “Nuestro Futuro Común”. 1987.

⁵ Sentencia C-519 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

sostenible, lo que el constituyente pretendía era que se armonizaran o conciliaran el derecho al ambiente sano con el derecho a la libertad económica.

En esa medida, la Carta Política consagra la libertad económica como un derecho susceptible de ser limitado en aquellas situaciones en que pueda verse comprometido con fines constitucionalmente valiosos, dentro de los cuales se destaca el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio ecológico. Lo anterior supone, entonces, que el mencionado equilibrio entre ambos bienes jurídicos debe ser conciliado en cada caso particular, con el fin de evitar que en abstracto uno prevalezca sobre el otro.

El deber del Estado de conservar las áreas de especial importancia ecológica

El mandato constitucional de protección al ambiente se ve reflejado en una serie de obligaciones que el Estado debe cumplir. Al respecto, la Corte ha sostenido que al Estado le corresponde:

“(...) 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.”⁶ Negrilla propia.

En el sentido de la Sentencia C-035 de 2016 y Como se mencionó con anterioridad, el Estado tiene que cumplir con una serie de deberes para materializar la obligación de protección de ambiente sano consagrada en la Constitución Política. Ahora bien, con el objeto de determinar si la norma acusada se ajusta a la Constitución Política, la Corte hará énfasis en el análisis del deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica, por cuanto el reparo a la norma atacada se funda principalmente en la afectación de un tipo de área que requiere de una protección especial, esto es, el ecosistema de páramo. Análogamente pudiendo situar este Kárstico y Bosque Húmedo Tropical a la protección que cubre el área de páramo por la Corte en la citada sentencia.

En el plano internacional existe un marco regulatorio sobre áreas protegidas en el Convenio de Diversidad Biológica (en adelante CDB)⁷. Según el CDB, el área protegida

⁶ Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

⁷ El CBD fue aprobado por la Ley 165 de 1995, promulgada por el Decreto 205 de 1996 y declarada exequible mediante Sentencia C-519 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

se define como “*un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación*”.

Respecto de los objetivos específicos de conservación, el CDB establece ciertos lineamientos que cada Parte Contratante debe implementar, dentro de los cuales se destacan: (i) el establecimiento de un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica y cuando sea necesario, elaborar las directrices para su selección, establecimiento y su ordenación; (ii) reglamentar o administrar los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible; (iii) promover la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; (iv) promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas y, (v) rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas, mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación.

En concordancia con las normas constitucionales y el CDB, las áreas de especial importancia ecológica han tenido un desarrollo legislativo y reglamentario bastante amplio en el ordenamiento jurídico colombiano⁸. En este sentido, en las distintas regulaciones sobre áreas protegidas confluyen una amplia gama de elementos, instrumentos y entidades para la protección de dichas áreas. En consecuencia, la Corte advierte que de las distintas regulaciones se desprende un entramado normativo complejo compuesto por normas que regulan (i) áreas con distintos niveles de protección; (ii) áreas protegidas del orden nacional y del orden regional; (iii) áreas protegidas públicas y privadas y, (iv) las funciones de las distintas autoridades competentes para su administración, manejo y protección.

Ahora bien, la creación de las áreas de especial importancia ecológica persigue distintas finalidades, tales como: (i) asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; (ii) garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; y (iii) garantizar la permanencia del medio natural, o de alguno de sus componentes, como fundamento

⁸ La evolución de las normas sobre áreas protegidas ha sido bastante dispersa. Es así como a través de la Ley, 2º de 1959, el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, se han creado distintos tipos de áreas y estrategias de conservación. Con el fin de consolidar un cuerpo normativo que armonizara dichas normas, mediante el Decreto 2372 de 2010 se dictaron una serie de disposiciones en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de manejo que lo conforman. Según este Decreto “(...) se hace necesario contar con una reglamentación sistémica que regule integralmente las diversas categorías y denominaciones legales previstas en el Decreto-ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a la luz de las disposiciones previstas en la Ley 165 de 1994, establezca los objetivos, criterios, directrices y procedimientos para selección, establecimiento y la ordenación de las áreas protegidas y defina además algunos mecanismos que permitan una coordinación efectiva del mencionado sistema”.

para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza⁹.

Unido a lo anterior es pertinente informar sobre los impactos negativos que representan las represas. Al respecto ha dicho international rivers: "Muchas veces la energía hidroeléctrica es considerada una tecnología "amigable con el ambiente, sin embargo los estudios científicos indican que la descomposición de la materia orgánica en los embalses produce cantidades significativas de gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. El impacto de los embalses tropicales puede ser mucho más alto incluso comparado con las plantas más contaminantes de combustibles fósiles".

HECHOS DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO Y DE LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Se pasara a narrar los hechos que se dieron dentro del trámite de la licencia ambiental en el caso que hoy solicita medida.

PRIMERO: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA S.A.S. E.S.P, allegó mediante radicado No. 4120-E1-8886 del 25 de febrero de 2014 la información adicional solicitada por la ANLA en el Auto No. 062 del 11 de enero de 2013 y en el Auto 917 del 8 de abril de 2013 (que resolvió recurso de reposición interpuesto contra el Auto 062 del 11 de enero de 2013). Posteriormente mediante radicado 4120-E1-9899 del 3 de marzo de 2014 Producción de Energía S.A.S. E.SP., solicita la sustitución de siete (7) de los anexos radicados el 25 de febrero en la ANLA, término que extemporáneamente se aplicó unilateralmente de la empresa adjuntando un CD con la información actualizada y la entidad, admitiendo esta irregularidad procesal.

SEGUNDO: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, mediante la Resolución 0168 del 13 de febrero de 2015, otorgó a la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGIA S.A.S E.S.P. PROE S.A.S. E.S.P. con Nit 900467544-4, Licencia Ambiental para el Proyecto "Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte—Proyecto PORVENIR II", en las fases de construcción, operación y abandono, localizado en jurisdicción de los municipios de San Carlos, Puerto Nare, San Luis y Caracolí (para el componente socioeconómico) en el departamento de Antioquia.

TERCERO: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, mediante la Resolución 0726 del 19 de junio de 2015 como respuesta a recursos de reposición, ratificó la Resolución 0168 del 13 de febrero de 2015, que otorgó a la empresa

⁹ Decreto 2372 de 2010. Artículo 5.

PRODUCCIÓN DE ENERGIA S.A.S E.S.P. PROE S.A.S. E.S.P. con Nit 900467544-4, Licencia Ambiental para el Proyecto "Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte — Proyecto PORVENIR II", en las fases de construcción, operación y abandono, localizado en jurisdicción de los municipios de San Carlos, Puerto Nare, San Luis y Caracolí (para el componente socioeconómico) en el departamento de Antioquia.

CUARTO: el 31 de octubre de 2014 los técnicos designados por la ANLA Para la evaluación del proyecto hidroeléctrico Porvenir 2, cargaron el estudio técnico de no viabilidad al "Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte—Proyecto PORVENIR II" en el sistema SILA de la Autoridad Ambiental.

QUINTO: el concepto técnico 603 de febrero 11 de 2015, otorga viabilidad al "Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte—Proyecto PORVENIR II"

SEXTO: existe un inminente riesgo de desaparecer un ecosistema especial y sus cadenas bióticas y abióticas, físico-químicas, de importancia geológica y estratégico para la nación, cargado de un alto contenido prehispánico en su componente cultural.

SÉPTIMO: geológica, hidrológica y arqueológicamente, no se cumple la certeza de los estudios necesarios para un panorama real, debido a la complejidad de estudio del territorio, por lo que se requiere un estudio más profundo.

OCTAVO: debajo del Río Samaná Norte, corre otra fuente hídrica de iguales condiciones al Río Principal.

NOVENO: de acuerdo a la configuración geológica de un tramo del proyecto, pierde capacidad de producción por filtraciones.

DIEZ: no se cumplieron los estándares técnicos para la prospección arqueológica allegada al trámite de licenciamiento.

ONCE: en la actualidad, se desarrolla el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de Cuenca Hidrográfica Samaná Norte y acuíferos, donde la ordenación de afluentes está en trámite para la sostenibilidad, siendo esta la base de ordenamiento territorial, mediante Resolución No. 1124874 de octubre de 2014 de la Autoridad Ambiental Regional CORNARE.

DOCE: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, negó la construcción y ejecución de central hidroeléctrica Porvenir I sobre la Cuenca del Río Samaná Norte.

TRECE: Con el fin de cumplir con el requisito de procedibilidad consagrado en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 solicité la Autoridad Ambiental –ANLA- adoptar las medidas necesarias de protección del derecho ambiental amenazado mediante la nulidad de la Resolución 0168 del 13 de febrero de 2015, por medio de la cual se otorgó licencia ambiental a la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGIA S.A.S E.S.P. PROE S.A.S. E.S.P. con Nit 900467544-4, Licencia Ambiental para el Proyecto "Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte—Proyecto PORVENIR II", en las fases de construcción, operación y abandono, localizado en jurisdicción de los municipios de San Carlos, Puerto Nare, San Luis y Caracolí (para el componente socioeconómico) en el departamento de Antioquia el pasado 29 de septiembre con radicado 2016062270 sin que a la fecha hubiese obtenido respuesta.

“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda”.

SUJETOS DE DERECHO

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ha actuado contra la moralidad de la administración pública, al otorgar licencia, no existiendo las condiciones de viabilidad técnicas del proyecto.

Justificación Derechos Colectivos Violados. Artículo 4 ley 472 de 1998

a), “El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias”.

Al realizarse este proyecto, se deteriorará el ambiente a un grado desproporcionado de beneficios otorgados por el aprovechamiento hídrico de la formación geológica, por lo que se legitima la causa para la búsqueda de la protección de este derecho colectivo invocado.

c), “La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible; su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la



protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente”.

La pérdida de funcionalidad de la Cuenca del Río Samaná Norte con el represamiento de su cauce en esta formación del pleistoceno, rompe el equilibrio de un Bosque Húmedo Tropical y los diferentes beneficios a los organismos vivos que dependen de ella.

PRETENSIONES

PRIMERA: Solicitamos afablemente se verifique la legalidad del concepto técnico no. 603 de febrero 11 de 2015 que da viabilidad al “Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte – Proyecto Porvenir II” y en caso de considerar pertinente, solicitar peritaje alterno frente a las afectaciones bióticas, abióticas, físicas, geológicas, hídricas, socioeconómicas y arqueológicas, requiriendo a una o más instituciones universitarias de la Nación para cumplir esto. En caso que el despacho observe irregularidad sobre el concepto técnico enunciado proceda a ordenar su exclusión dentro del trámite y otorgamiento de licencia ambiental.

SEGUNDA: Se requiere al Despacho para que se pronuncie sobre el cumplimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a las respuestas de las preguntas surgidas bajo el Decreto 330 de 2007 – audiencia pública ambiental- dentro del proceso de otorgamiento de licencia ambiental al “Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte – Proyecto Porvenir II”.

TERCERA: Rogamos señor Magistrado, ordene la suspensión definitiva de las Resoluciones 0168 de febrero 13 de 2015 y 0726 del 19 de junio de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que otorga licencia para la ejecución y operación del “Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte – Proyecto Porvenir II” dada la inviabilidad técnica del proyecto, demostrada en este proceso.

MEDIDA CAUTELAR PROVISIONAL

Sobre el artículo 25, literal b) de la Ley 472 de 1998 y de manera oportuna, solicitamos Cordialmente, este despacho Ordene a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a PRODUCCIÓN DE ENERGIA S.A.S E.S.P. PROE S.A.S. E.S.P., **SUSPENDAN TODAS LAS ACTIVIDADES** relacionadas a la ejecución del “Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte – Proyecto Porvenir II”, hasta no tener claridad en las

contradicciones presentadas dentro del proceso, el cumplimiento de los Mandatos legales, Constitucionales y Jurisprudenciales con relación a las diferentes áreas de protección ecológica y social. Que den certeza científica de la viabilidad del proyecto en el entendido de la aplicación del principio de *precaución*.

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA PREVENTIVA DEL DAÑO IRREPARABLE

Lo ha sostenido entonces la Corporación Constitucional en la **Sentencia C-293 de 2002** (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), cuando declaró la constitucionalidad del literal c) del numeral 20 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993, que dispone la aplicabilidad del principio de precaución para suspender actividades y obras. En efecto, una de las disposiciones que estudió la Corte en aquella oportunidad establece la sanción de suspensión de una obra o actividad que, por supuesto, ya cuenta con una licencia ambiental y con un contrato de concesión, siempre que de ella "*pueda derivarse un daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana*". En tal ocasión, la Corte sostuvo:

"4.3 En este punto, sólo resta mencionar que no se violan los artículos constitucionales mencionados por el actor (trabajo, propiedad, derechos adquiridos), si, como consecuencia de una decisión de una autoridad ambiental que, acudiendo al principio de precaución, con los límites que la propia norma legal consagra, procede a la suspensión de la obra o actividad que desarrolla el particular, mediante el acto administrativo motivado, si de tal actividad se deriva daño o peligro para los recursos naturales o la salud humana, así no exista la certeza científica absoluta."

A continuación la Corte fundamentó su decisión en que en estos casos es la misma Constitución Política la que establece una regla de prioridad explícita, que se deriva de la reiteración que hacen los artículos 1º, 58 numeral 2º, 80 y 95 ordinal 8º. Afirma la Corte:

"Una teórica discusión jurídica en materia ambiental, sobre cuáles derechos prevalecen, la resuelve la propia Constitución, al reconocer la primacía del interés general, bajo las condiciones del artículo 1º. Al señalar que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que 'es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica' (art. 58, inciso 2). Además, señala la Constitución, que el Estado debe 'prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.' (art. 80). Así mismo, establece dentro de los deberes de la persona y del ciudadano la obligación de

'proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano' (art. 95, ordinal 8)."

Algunas Generalidades del principio ambiental de precaución

El principio de precaución, -también llamado principio cautelar- es el más revolucionario del grupo de principios de derecho ambiental. Y su aceptación unánime es la que más riñe con las concepciones clásicas de la doctrina jurídica.

Podría decirse que el principio de precaución se muestra como un mandato que invierte las reglas de la lógica, y las de la dinámica probatoria, de la misma manera como lo fue en su momento el principio *in dubio pro reo* en el derecho penal.

Porque ambos principios se basan en un común elemento: la incertidumbre. Y la inclinación de esa incertidumbre hacia una de las partes en disputa. En el caso del principio de precaución, hablamos de incertidumbre científica, y para seguir con el símil, podríamos definirlo como un mandato que exige que: la duda se resuelva al favor del potencial afectado, en este caso la cuenca Hídrica del Río Samaná Norte y su cadena como es argumentado en esta acción.

En aras de este principio se suele entonces prescribir que la falta de certeza científica sobre lo peligroso o no de una actividad que todavía no evidencia sus efectos, no podrá ser obstáculo para que tomen medidas tendientes a regular dicha actividad y buscar la protección del sujeto hipotéticamente afectado. O para usar la cita típica: "La falta de certeza científica no debe utilizarse como razón para posponer medidas destinadas a prevenir el deterioro del medio ambiente."

Además del elemento de la incertidumbre, el segundo elemento constitutivo del principio es el riesgo. O mejor, la localización clara de un riesgo, aunque no así su concreción.

El principio de precaución en el ordenamiento jurídico colombiano

El principio de precaución se encuentra escrito en la Constitución Política de 1991. En su artículo 80 consagra como deber del Estado: "...prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados." Y la Corte Constitucional ha admitido que dentro de esos factores de deterioro ambiental se debe incluir la idea de riesgos ambientales, de grave amenaza.

De igual manera el numeral primero, del artículo primero de la ley 99 de 1993, remite e inserta al ordenamiento interno todos los principios consagrado en la Declaración de Río de 1991 ¹⁰. Y ya de manera expresa, su numeral 6, dice al respecto:

“6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.”

Además algunas de las competencias sancionatorias que la misma ley 99 de 1993, da a las autoridades ambientales, se sustentan a su vez en el principio de precaución, como es el caso del artículo 85, numeral 2, literal c, que otorga al Ministerio de Ambiente o a las Corporaciones Autónomas Regionales, la facultad de poder suspender una obra determinada, por constatar un peligro medioambiental a tratar desde el principio de precaución.

La procedencia del principio de precaución también ha sido avalada por la Corte Constitucional, que lo ha dicho que se aplica cuando *“...el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, **porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción...**”*

Su constitucionalidad fue estudiada en la sentencia C 292 de 2002. En la cual pudo concluir la Corte que:

“...cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones específicas, encaminadas a evitar un peligro de daño grave, sin contar con la certeza científica absoluta, lo debe hacer de acuerdo con las políticas ambientales trazadas por la ley, en desarrollo de la Constitución, en forma motivada y alejada de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho.”

En esa oportunidad, la Corte se permitió avalar la procedencia de la aplicación del principio de precaución por cualquier autoridad nacional, pero previo al cumplimiento de un listado de requisitos que estableció así:

*“(i) Que exista peligro de daño; (ii) **Que éste sea grave e irreversible;** (iii) **Que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta;** (iv) **Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente.** (v) **Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.**”*

¹⁰ En la sentencia C 528 de 1994, se revisó la constitucionalidad de esa inserción que hiciera esta ley de la Declaración de Río. Se dijo que la Declaración no era tenida como un tratado internacional suscrito, peor no obstante tal remisión era ajustada a la Constitución.

Como se puede ver, se trata en todo caso de una concepción moderada, o débil, del principio de precaución, en tanto es limitado por toda una serie de requisitos previos, dentro de los que se encuentra la gravedad del daño, y también la limitación a la incertidumbre, pues se exige cuando menos un principio de certeza científica.¹¹ En el caso concreto a estudiar, se presenta el cumplimiento de las condiciones para evaluar la aplicación de este principio.

De otro lado, en otras oportunidades, la Corte ha admitido la inserción al bloque de Constitucionalidad de varios documentos internacionales, interamericanos que consagran el principio, como la Observación General No. 14¹² del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales¹³, que lo consagró como mecanismo para proteger la salud humana.

Si hablamos en un estricto sentido de salud humana podríamos decir que cualquier acción que hagamos en contra de la lógica natural estamos atentando con nuestra salud, estamos en constante evolución y descubrimiento; en este tiempo la humanidad hace un llamado a la conciencia para comprender la lógica de la naturaleza, la ciencia lo demuestra, años atrás se justificaba un daño irreversible al medio ambiente con una necesidad del hombre, pues se veía separado cada ecosistema y se tenía la percepción de que el uno no afecta al otro, pero hoy en día la ciencia con todos sus avances de descubrimientos nos comprueba los mitos de muchas culturas que hablan de la conexión de cada ser con cada ser, y la ciencia lo traduce en un lenguaje aterrizado a nuestra lógica, donde se demuestra la conexión que se tiene entre cada ecosistema, cada individuo, es simplemente un perfecto equilibrio demostrado en datos científicos

¹¹ La corte distingue entre lo que puede ser "un principio de certeza científica" y la "certeza científica absoluta."

¹² En este instrumento el Comité interpretó el numeral primero del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. (Negrillas fuera del texto)

¹³ El Comité DESC es el órgano autorizado para interpretar las normas incorporadas al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – instrumento que es parte del bloque de constitucionalidad y forma parte del ordenamiento interno, conforme al artículo 93 de la Constitución Política-, con el objetivo de lograr la plena efectividad de los derechos proclamados en este instrumento. La función interpretativa de este órgano es ejercida a través de observaciones generales, las cuales, aunque no forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, sí forman parte del bloque como fuente interpretativa, conforme al artículo 93, inciso 2, de la Constitución Política. En consecuencia, la Corte Constitucional en su jurisprudencia, ha adoptado los lineamientos proferidos por este órgano para determinar el alcance y contenido de derechos constitucionales, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la salud.

Por lo anterior, es necesario concluir que en virtud de lo dispuesto en los artículos 1º, 58, 80 y 95 de la Constitución Política, la protección del ambiente prevalece frente a los derechos económicos adquiridos por particulares mediante licencias ambientales y contratos de concesión en las circunstancias en que esté probado que la actividad produce un daño, o cuando exista mérito para aplicar el principio de precaución para evitar un daño a los recursos naturales no renovables y a la salud humana.

DERECHO

Invocamos como fundamento de derecho el artículo, 8, 79, 80 y 88 de la Constitución Política y la Ley 472 de 1998 y demás normas concordantes con el objeto de la acción.

PRUEBAS

Solicitamos señor Magistrado, se decreten, practiquen y tengan como pruebas las siguientes:

Testimoniales

Sírvase Honorable Juez citar a la señora:

1. Al profesional, miembro del equipo, que soportó el concepto técnico de no viabilidad al proyecto hidroeléctrico, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales **ALEJANDRO FRANCO ROJAS**, desde el Componente Abiótico. Para que de Fe pública del estudio realizado. Notificación en el correo electrónico: guacamayadumeka@gmail.com
2. A la ex personera del Municipio de San Carlos, doctora **MARLIN IRINA RODRÍGUEZ YEPES**, para que dé testimonio de las intervenciones realizadas como tercera interviniente para la fecha. Notificación en el correo electrónico: 30fernanda@gmail.com
3. Al señor Jules Matthieu Domine, Ingeniero Hidrólogo de la Universidad Lisseedienne de Francia, para que testifique sobre las afectaciones en el Mundo de la Generación Eléctrica a través del Represamiento Hídrico. Notificación en el correo electrónico: domine.j@gmail.com
4. Al señor Justo Arosemena, especialista de la Universidad de Yale, sobre las consecuencias ecosistémicas de las afectaciones a las Cuencas Hídricas en el mundo. Notificación en el correo electrónico: jfarosemena@gmail.com
5. Al señor Floro de Jesús Buitrago, desplazado del conflicto armado, para que dé testimonio de la Re victimización sufrida por el Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II.

Audiencia de Pacto de Cumplimiento

Sírvase Honorable Juez citar audiencia de Pacto de Cumplimiento, establecida en el artículo 27 de la ley 472 de 2009.

Interrogatorio de Partes

A la directora de la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES CLAUDIA VICTORIA GONZÁLEZ, o quien haga sus veces, para que informe sobre el procedimiento adelantado para la expedición de la licencia ambiental de la referencia explicando la existencia del concepto técnico negativo expedido por el equipo evaluador de la ANLA y el concepto técnico positivo que dio viabilidad a la licencia ambiental. Notificaciones en la CALLE 37 No 8 – 40 Bogotá – DC. Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@anla.gov.co.

Al señor Director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, o quien haga sus veces, para que resuelva cuestionario sobre los efectos reales a las víctimas del conflicto armado interno en razón a este proyecto hidroeléctrico. Notificación en Calle 72 No. 11 - 81 / 85 Primer Piso - Teléfono (57-1) - 3770300. Bogotá – Colombia.

Al señor Ernesto Montenegro del Instituto Colombiano de Antropología e Historia para que resuelva cuestionario sobre el potencial arqueológico y cultural de la zona de influencia del proyecto y el trámite surtido dentro del proceso de licenciamiento. Notificación en calle 12 No 2 – 41, Bogotá- Colombia.

Al Director de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alan Jara, para que resuelva cuestionario sobre la condición de las víctimas del conflicto interno armado dentro de este proyecto. Notificación en calle 16 No 6 – 66, edificio Avianca pisos 19, 21, 32. Radicación notificaciones judiciales: Carrera 6 No 14 - 98 piso 4 ed. Parque Santander, Bogotá, Colombia.

Al Ministro de Minas y Energía, señor GERMÁN ARCE ZAPATA, para que resuelva cuestionario sobre la motivación de la declaratoria de utilidad pública del proyecto hidroeléctrico Porvenir 2 a través de la Resolución 0164 del 05 de junio de 2013. Notificaciones en la calle 43 No 57 – 31 CAN Bogotá DC, Colombia.

De oficio

Sírvase requerir a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que allegue en su integralidad copia del expediente LAM 4697 que tramitó licencia ambiental al “Desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná Norte – Proyecto Porvenir II”.

Requírase copia del proceso de nulidad simple interpuesto contra la Resolución No. 0168 de febrero 13 de 2015 expedida por la Anla, que actualmente cursa en el Consejo de Estado. Ref.: Expediente 2016-00149-00, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera. Consejera de Estado, María Claudia Rojas Lasso.

Requírase copia del proceso de nulidad simple interpuesto contra la Resolución No. 0164 del 05 de junio de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, que actualmente cursa en el Consejo de Estado. Ref.: Expediente 2013-00-0110, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera. Consejera de Estado, María Elizabeth García González.

Ordénese a la Fiscalía General de la Nación, abrir investigación penal por las conductas punibles sobre la administración pública y el Medio Ambiente, que aquí se puedan evidenciar.

Ordénese a la Dirección del Consorcio POMCAS oriente antioqueño, señora Lida Giraldo para que allegue la información que posea y sea de utilidad para soportar la importancia ecológica y social de la Cuenca Hidrográfica Samaná Norte. Notificación en la Dirección carrera 87 No 30 – 65, Medellín - Antioquia.

Sírvase solicitar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el expediente que negó la construcción y operación de la central hidroeléctrica Porvenir I sobre esta misma cuenca.

Sírvase ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Río Negro y Nare – CORNARE-, para que remita la información del Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca del Río Samaná Norte. Notificación en la dirección Autopista Medellín – Bogotá, Carrera 59 44-48, Kilómetro 54 El Santuario, Antioquia. Teléfono: (57 4) 5201170, Fax: (57 4) 5460229. Correo Electrónico: cliente@cornare.gov.co

Documentales

1. Copia del Auto 062 de enero 11 de 2013.
2. Copia de la Resolución 0168 de febrero 13 de 2015.

3. Copias de Recursos de Reposición a la Resolución 0168 de febrero 13 de 2015.
4. Copia de la Resolución 0726 de junio 19 de 2015.
5. Copia de oficio con Radicado 2016004575-2- 1-000 del 09 de febrero de 2016.
6. Copia del Concepto Técnico de no viabilidad de octubre 31 de 2014.
7. Pantallazo del Sistema SILA de registro, en la intranet de la ANLA.
8. Copia del Concepto Técnico de viabilidad No. 603 de febrero 11 de 2015.
9. Copia oficios Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
10. Copia de concepto de la Unidad de Restitución de Tierras.
11. Copia de Resolución 112 - 4874 de octubre 10 de 2014.
12. Copia de Resolución No. 164 de junio 5 de 2013.
13. Links de 2 audios periodísticos que evidencian la confrontación de conceptos técnicos e ilustran claramente la vulneración de derechos.
14. Oficios de Relación Espiritual del Pueblo Emberá, con la Cuenca del Río Samaná Norte por el Resguardo Indígena Cristianía-Karmatarúa
15. Oficio con el fin de agotar requisito de procedibilidad.

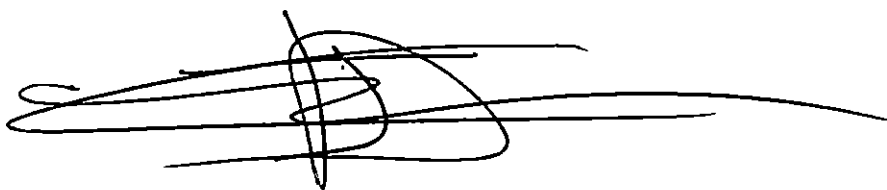
NOTIFICACIONES

A LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES en la Calle 37, No. 8-40
Teléfono: (57-1) 2540111, Fax: (57-1) 2540119.

DEMANDANTE:

FUNDACIÓN YUMANÁ: Calle 48 B No. 10 Sur101 del Municipio de Medellín

De ustedes, Honorable Magistrado,



JULES MATTHIEU DOMINE

REPRESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN YUMANÁ

CE 470. 178

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2016/08/29

Hora: 08:47



Número de radicado: 0014311593 - RMTFVA

Página: 1

Código de verificación: VbjmmModjmcjgbrj

Copia: 1 de 1

Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a www.certificadoscamara.com y digite el código de verificación. Este certificado, que podrá ser validado por una única vez, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 43 y 144 del decreto 2150 de 1995 y su reglamentario el Decreto 0427 de 1996.

CERTIFICA

NOMBRE: FUNDACION YUMANA

ESAL No.: 21-017343-22

DOMICILIO: MEDELLIN

NIT: 901002796-1

CERTIFICA

DIRECCION DE LA ENTIDAD: Carrera 48 B No. 10 SUR 101 MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

CONSTITUCION: Que por ACTA, en mayo 28 de 2016 registrada en esta Entidad en agosto 25 de 2016, en el libro 1, bajo el número 3229, se constituyó una entidad sin ánimo de lucro Esal-Principal denominada:

FUNDACION YUMANA

CERTIFICA

REFORMA: Que hasta la fecha la entidad no ha sido reformada.

CERTIFICA

VIGENCIA: Que la entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su duración es indefinida.

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2016/08/29

Hora: 08:47

Numero de radicado: 0014311593 - RMTFVA

Página: 2



Código de verificación: VbjmmModjmcjgbrj

Copia: 1 de 1

CERTIFICA

OBJETO: Del Objeto Social, Objetivos Generales y Específicos. La entidad, nombre nativo del Río Magdalena, que representa el Río Amigo, busca generar estrategias de desarrollo y producción de energías limpias y conservación de recursos hídricos en la cuenca del río Samaná Norte propendiendo por la seguridad y soberanía hídrica del Departamento de Antioquia y del País.

Es una fundación que fomenta la integración de conocimientos que propenden por nuevos modelos de desarrollo, donde hombre y naturaleza, conviven en armonía. Desde los Medios, el Arte, las Comunicaciones, la Ciencia, las Finanzas, la Educación y lo Humanístico y finalmente desde el Componente normativo o jurídico, se evalúan las alternativas ajustadas a la equidad de las condiciones actuales.

OBJETIVOS GENERALES

a) Fomentar la educación, el crecimiento personal-colectivo y la recuperación y protección de la diversidad biocultural a través de los Medios, el Arte, las Comunicaciones, la Ciencia, las Finanzas, la Educación y lo Humanístico y finalmente desde el Componente normativo o jurídico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Presentar, ejecutar, administrar, operar proyectos, planes, programas en general, encaminados a beneficiar a las comunidades originarias, afrocolombianas y campesinas.

b) Coordinar, dictar, organizar, ejecutar talleres, conferencias, seminarios, capacitaciones, charlas, foros, congresos y diplomados en las distintas áreas del saber hacer.

c) Desarrollar y generar programas especiales a través de convenios, o directamente con instituciones en beneficio de los niños, jóvenes, mujeres cabeza de familia y adultos mayores de las Comunidades Tradicionales/Originarias.

d) Gestionar proyectos de productividad tradicional y cultural, orientadas a las actividades agro, pesqueras, turístico-pedagógicas y ambientales; esto dentro de las comunidades cuya integridad no se vea afectada por dichas actividades.

e) Establecer convenios con empresas públicas, mixtas y privadas, ONGs nacionales e internacionales en la búsqueda de apoyo financiero y tecnológico de todos los proyectos pensados para la autonomía de las comunidades y de los pueblos.

f) Desarrollar modelos económicos o de negocios, pensado desde lo

**** En la Cámara estamos comprometidos con el medio ambiente. Este documento ha sido impreso en papel ecológico ****

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2016/08/29

Hora: 08:47

Número de radicado: 0014311593 - RMTFVA

Página: 3



Código de verificación: VbjmmModjmcjgbrj

Copia: 1 de 1

global, con acciones locales que propendan por la autonomía de las comunidades.

g) Impulsar los niveles organizativos de las comunidades en el país y el continente/mundo.

Para cumplir el objeto social de la entidad, podrá establecer convenios, acuerdos, contratos con otras personas, naturales y jurídicas, entes territoriales, entidades descentralizadas distritales, regionales, nacionales e internacionales, empresas de economía mixta, industriales y comerciales del Estado, empresas privadas, fondos mixtos, colegios, universidades, entes ambientales, institutos de educación formal y no formal, organizaciones de salud, Organizaciones No gubernamentales -ONG's-, cooperativas, clínicas, hospitales, consultorios médicos, empresas asociativas de trabajo, instituciones a nivel nacional e internacional y con entidades estatales según la Ley vigente.

CERTIFICA

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES: \$100.000,00.

Por acta número del 28 de mayo de 2016, de la asociados registrado en esta Cámara el 25 de agosto de 2016, en el libro 1, bajo el número 3229

CERTIFICA

REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación legal principal de la entidad, estará en cabeza del Director Ejecutivo y la representación legal suplente, la realizarán el Director Administrativo y el Director Operativo, en caso de presentarse ausencia justificada.

CERTIFICA

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
DIRECTOR EJECUTIVO	JULES MATTHIEU DOMINE DESIGNACION	C.E. 470.178
DIRECTOR OPERATIVO	JUAN CARLOS ARBELAEZ LEON DESIGNACION	70.561.803
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TARA LORAINÉ DAVIS DESIGNACION	C.E. 580.936

Por Acta del 28 de mayo de 2016, de la Asociados, registrado(a) en esta Cámara el 25 de agosto de 2016, en el libro 1, bajo el número 3229

CERTIFICA

****En la Cámara estamos comprometidos con el medio ambiente. Este documento ha sido impreso en papel ecológico****

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2016/08/29

Hora: 08:47

Número de radicado: 0014311593 - RMTFVA

Página: 4



Código de verificación: VbjmmModjmcjgbrj

Copia: 1 de 1

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL. -- Las siguientes son las funciones del Representante Legal Principal y de los Suplentes:

- a. Tomar parte en las deliberaciones de la Asamblea.
- b. Usar la firma social.
- c. Hacer depósitos bancarios y girar sobre ellos.
- d. Enajenar a cualquier título los bienes muebles e inmuebles de la fundación.
- e. Dar y recibir en mutuo cantidades de dinero.
- f. Firmar los documentos necesarios para dar cumplimiento al objeto social y objetivos de la Fundación, con particulares, entidades estatales, internacionales, no gubernamentales y en general, cualquier contrato, convenio o acuerdo comercial o social de carácter lícito.
- g. Conferir, sustituir o revocar los mandatos judiciales y extrajudiciales que se presenten.
- h. Presentar bimestralmente informe de todas las actividades realizadas y proyección del bimestre siguiente.
- i. Elaborar el proyecto de presupuesto para cada año y presentarlo a la Asamblea para su aprobación, a más tardar el 1 de diciembre de cada año.
- j. Recibir y mantener bajo inventario los bienes de la fundación.
- k. Cumplir las demás funciones que por naturaleza de su cargo le correspondan.

Parágrafo. Para contratar con entidades de carácter privado, gubernamental, no gubernamental, nacionales o extranjeras, por más de Cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, haciendo su respectiva conversión de la moneda extranjera a la nacional si es del caso, el Representante Legal requerirá autorización de la Asamblea.

CERTIFICA

REVISORIA FISCAL

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

WILMAR HERNAN SANCHEZ

71.754.164

GARCIA

DESIGNACION

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2016/08/29

Hora: 08:47

Número de radicado: 0014311593 - RMTFVA

Página: 5



Código de verificación: VbjmmModjmcjgbrj

Copia: 1 de 1

Por Acta del 28 de mayo de 2016, de la Asociados, registrado(a) en esta Cámara el 25 de agosto de 2016, en el libro 1, bajo el número 3229.

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

Carrera 48 B No. 10 SUR 101 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL

yumafundacion@gmail.com

CERTIFICA

Que en la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, por una sola vez y en un plazo no mayor a 30 días contados desde el momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2016/08/29

Número de radicado: 0014311593 - RMTFVA

Hora: 08:47

Página: 6



Código de verificación: VbjmmModjmcjgbrj

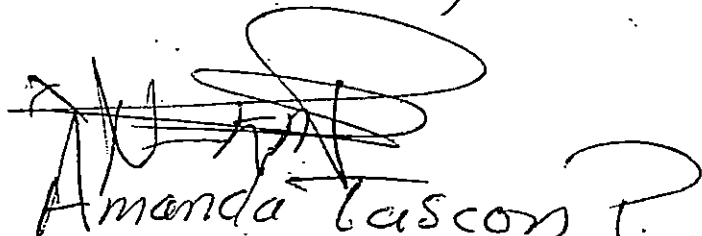
Copia: 1 de 1

**SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS**

Por esto y las investigaciones espirituales,
Pedimos a usted, obre como la Constitución
Política y el deber natural mandan.

Nuestro sistema organizativo, cultural y
Tradicional no obedece a las divisiones
Político-Administrativas del Estado
Colombiano, es por esto que pese a
encontrarse el río Samaná en otra
Subregión de Antioquia, nuestra protección
se extiende por las conexiones Ancestrales.

Atentamente,


Amanda Tascon P.
Vice Gobernadora
del Cabildo

Resguardo Indígena Cristianica
Jardin Santiago.

Resguardo Indígena Karmatarua

Junio 25 de 2016

Tribunal Administrativo de Bogotá

Reaban un Saludo de Familia,

Este cabildo y bajo las consultas espirituales de nuestros mayores,

Identifican Sobre el río Samaná Norte, un sitio con muchos lugares sagrados utilizados por nuestros

ancestros, una gran cantidad de plantas medicinales que ya se han

perdido en otros de nuestros territorios, figuras y petroglifos, que narran las

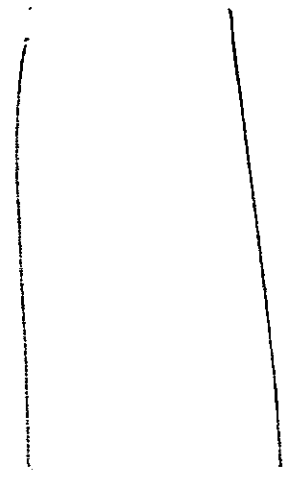
historias de los antepasados que habitaron esta cuenca, la cual

hemos declarado de protección espiritual y banco medicinal.

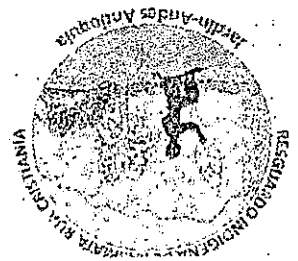
Médicos Tradicionales,

- Apolinar Yagari Tascon ce 15.520.777
- wilson Andres tamanis. tascon #1230140
- Leopoldo Yagari 3373240
- los ARNULFO Vayvianza 15534945
- José Norberto Tascon N. 15529762.
- fidel de Jesus Baquiza G. 70.810527
- luis daniel Niaza G 568.366.
- Jesús Rodrigo Yagari 15527397.
- Victor Tamanis 3.510 891
- Florencia Elena taminist 43 281 814
- Eleuterio tascon p. 3.372 973
- Argemiro Baquiza f. 3.669 689
- Luis Alfonso Yagari ~~3.485.069~~ 15526824

La firma de la comunidad en listado adjunto de asamblea



Sumas 5



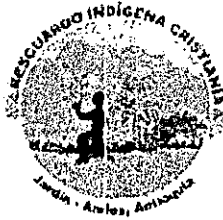
RESOLUCIONES INCORA 058 de 1995 y 037 de 2001
NIT 800 224 158

RESERVA INDIGENA KARMATA RUA CRISTIANA JARDIN-ANDRES ANTOQUIA

ACTIVIDAD: Asamblea comunitaria - Presentación de los Códigos
MES: Sábado 25 del mes de Junio 2016.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	FIRMA
Nemeses Bedoya P.	702788235	310435696	Secretario	<i>[Signature]</i>
MOS2 ARNULFO VILFLORES	1534945	314021082	CONSEJO	<i>[Signature]</i>
LUZELVIA A	42231955	3105281643		
Blanca Yegon Tamayo	43285383			
Alfaria Espinosa Gonzaga	42731919	3103V32358	Auxiliar	<i>[Signature]</i>
Deonice Yegon P.	1027882715	3105190051		<i>[Signature]</i>
Franco Yegon	1027884445	3137903519	Vendedor DIA	<i>[Signature]</i>
José Roberto Tascón N.	15529762	3225046627	Vendedor DIA	<i>[Signature]</i>
Maria Lucía Rentería	91488306			
Luz Estrella Tascón D.	43287550	3135755805		
Yegon Rumbal M.	568305			
Hilario de Jesus B.G.	20345134			
Edilma Páez	42781551			
Patricia Andrea Páez	15521397		Asistente	<i>[Signature]</i>
ORFICIA PANCHI YACARI	43281163			
MONICE ADRANA CERTEGAP	1047610782			

Granda



RESGUARDO INDIGENA KARMATA RUA CRISTIANA
 JARDIN - ANDES, ANTIOQUIA
 Resolución del Incora 059 de 1995 y 037 de 2001
 NIT 800224198-3.

ACTIVIDAD: Asamblea comunitaria presentacion de Acto Código
 FECHA: 06 / 25 / 2016

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Apolinar yegor t.	15520.717	Vecedor Local.	Apolinar
José yegor t.	3372.240	Jefe URM	
Guillermo yegor t.	3344.975	Asesoría jurídica	
Isidoro yegor t.	21887.440	Asesoría jurídica	
Dimitris yegor t.	42299.991	Asesoría jurídica	
María Ofelia C.V.	81439.545	-	María Ofelia
María Inés C.	1.046.91129.9	-	
Regilda González B	43.437.708	Auxiliar EPSJ	
Marta González	42.231.984	-	
Elvira yegor t.	43280.940	-	
Francis Helena Cortés	1027.887.798	-	
Ana Pipelina Vélez Cortés	42732.216	Amo de Casa	
Mabel Judith Vélez y.	43156.232	Docente CDZ	
Gilma Cortés	42430.062	Amo de casa	
Yuly Juliana Barrón	1017157.179	amo de casa de costurera	
Luisa Victoria Borrero	1009.34.774	de costurera	Luisa Borrero
Lida Yegor t. Cortés	1037329540	Joven	
RESUVEVELIA yegor t.	15524822	Amo de casa	RESUVEVELIA yegor t.
Luz Pastora Vélez Parra	4328.9973	Amo de casa	
María Inés Vélez yegor t.	42731914	Amo de casa	María Inés
Yolanda Tadeo	3380.730	-	
Ramón Cortés Vera	1027.581.494	-	

Suma 6



RESGUARDO INDIGENA KARMATA RUA CRISTIANA

JARDIN -ANDES, ANTIOQUIA

Resolución del Incora 059 de 1995 y 037 de 2001

NIT 800224198-3.

ACTIVIDAD:

FECHA: 06-25/2016

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Erma Rocio Bayuza	103732221	—	Erma Rocio Bayuza
Maria Belinda Cebalga Tascón	21461508	—	Maria Belinda Cebalga Tascón
Emerse Mercedes T.	32170327	Estudiante	Emerse Mercedes T.
Marvoni Niza	R.L.	Estudiante	Marvoni Niza
Carlos Miguel	PC	Estudiante	Carlos Miguel
Maria Olga Parachi C.	21462728	ama de casa	Olga Parachi C.
Victor Tamandis	3.510891	adulto mayor	Victor Tamandis
Isabel Velez	43285342	ama de casa	Isabel Velez
Gloria Elena Velez C.	43289022	—	Gloria Velez C.
Broyan Gomez Velez	1000654997	estudiante	Broyan Gomez Velez
Noemy Tascón Velez	1027884241	Diente, CDT	Noemy Tascón V.
Javier Tascón Y	70811392	FISCAL C	Javier Tascón Y
Jesús Braulio Y.	15533293	—	J. Braulio Y.
Bertha Velez P.	1027880197	Participante	Bertha V.
Diego Fermel Yagani	7.007-367.727	estudiante	Diego Fermel Yagani
Maria Rosalba Ganced	—	Participante	Maria Rosalba
Eulalia T.	21577244	ama de casa	Eulalia T.
Mariveliz Gonzalez	43.282.737	ama de casa	Mariveliz
Don Ma. Yanni Ganced	43282881	participante	Don Ma. Yanni Ganced
Orlando Campesino U.	155915420	Com. segs	Orlando Campesino U.
Wilson Andrés Jarama	337761	—	Wilson Andrés Jarama
Wilson Andrés Jarama	71230140	Escritor	Wilson Andrés Jarama
Marcos Tulio Velez T.	570.023	—	Marcos Tulio Velez T.

Sumari (B)



RESGUARDO INDÍGENA KARMATA RUÁ CRISTIANA JARDÍN-ANDES ANTIOQUIA

RESOLUCIONES INCORA 069 de 1906 y 037 de 2001
NIT 600 224 198 3

ACTIVIDA:

MES: 06-25/2016

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	FIRMA
Yeni Milena Domico	1193504688	1193504688		Yeni Domico
YODIS Yotani Panchi				YODIS Panchi
Luz Mercedes Yagari	43 281 252		amada de casa	Mercedes Yagari
Clara Elsy Yagari Vaquezani	42 737 470		amada de casa	Elsy Yagari
Luz Edilia Yagari Panchi	43 288 662		amada de casa	Luz Edilia
Elkin J. Panchi Yacari	75534914			Elkin P. Y.
Luis Alberto Velazquez B. Panchi	75 527 298			Luis Alberto Velazquez B.
Tania Silvana Tascón Certiga	1.027 887 001			Tania Silvana Tascón
Nelida Certiga Tascón	1.027 884 016			Nelida Certiga T.
Neiba Eliana Carapia C.	1007351730		Docente	Neiba Eliana C.
Alexia Tascón B. Panchi	43 287 244			
Maria Izabela Tascón	1001499380		amada de casa	
Guillermo Panchi G.	15 532 712		grupo de canción	Guillermo Panchi
Yeny Andrea B. P.	43.200.330		Docente	Yeny B. P.
Maria Fabiola Panchi	43.365.73		Ama de casa	Maria Fabiola P.
Beatriz E. Velazquez	21 464 512			
Reinel YAGARI YAGARI	15 531 894			Reinel Y. Y.
Ara Panchi Yagari Yagari	1057 323 929		Ama de casa	Ara V. Y.
Luis Adolfo Yagari B.	15527920			Luis A. Y.

Senor



RESGUARDO INDÍGENA KARMAATA RUA CRISTIANA JARDIN-ANDES ANTIOQUIA

RESOLUCIONES INCORA 059 de 1.995 y 037 de 2.001
TIT 800 224 198 -3

ACTIVIDA:

MES: 06/25/2016.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	FIRMA
Angel De Jesus Tascón N	1027.880.297	3117662118	Participante	
Guila Evaristo Aguirre	42589425	3146502726	Participante	
Norma Andrea Ramos yegari				
Paula Anelucci yegari	213.288.948		Deportista	
Ximena Isabel González Buzafala	1034324131	3104601520		
Norma Luz Tamariis	43.286.731			Norma Tamariis
Astrid Elena González T.	1027.880.205			Astrid González
Eduolida Rosal Tascón	427.252.651		participante	
Luz Mariana Naranjo T.	427.286.915		participante	
Mariana Cecilia y B.	218.23.894		participante	
James Carreras	1027.850.441		participante	
John Faber Pando Gutierrez	1037324826	3233710496	gestor	
Patricia Tascón P.	43.283.966		participante	Patricia Tascón
Stinson Sorezo Tomonís	211463798		participante	Stinson Sorezo T.
Therany Tamariis Tascón	2128.258.691			
Jilma Rosa P.G	213.287.112			Jilma Rosa P.G.
Eduy Dulcer Vaquez I.			Guarda	
José Helmiy Niño J.	1027.880.627		Guarda	
Daniel Pando G	15525723		coordinador	Daniel Pando



RESERVA INDIGENA KARMATA RUA CRISTIANA
JARDIN -ANDES, ANTIOQUIA
 Resolución del Incora 059 de 1995 y 037 de 2001
 NIT 800224198-3.

ACTIVIDAD: _____

FECHA: 06/25/2016

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Jesé Ursilio Yarón	15530.777	Asopler Vedor	<i>[Signature]</i>
Martín Yagari	15525.628		<i>[Signature]</i>
José Alberto Yagari	71230328		
José Emilio Yagari	15303548	Guardia	José Emilio Yagari
Alexandra Yagari	33762818	Asisten	Alexandra Yagari
Concepción Yagari	35449		Concepción Yagari
Luz Adriana Parul Y.	32.111.391		Luz Adriana Parul Y.
Margarita Yagari T.	21262197		Margarita Yagari T.
Lidia Stella Parul Y.	47286199		Lidia Stella Parul Y.
Amaira Tascos Cortes	7004027517	ama de casa	Amaira Tascos Cortes
Ledy Margarit Celumbos Parul	1027887978		Ledy Margarit Celumbos Parul
Liliana del Socorro T.	43289007	Amada de casa	Liliana del Socorro T.
Nora Silvia T-T	43.286.934		Nora Silvia T-T
Digna Lucia Vaquiaro C	42732169		Digna Lucia Vaquiaro C
Luz Joviana Niara T	32.111.344		Luz Joviana Niara T
Enrique Niara Y.	42732529		Enrique Niara Y.
Lilia del S Yagari G	43283329		Lilia del S Yagari G
Luz Marina González Y	42682.286	Docente	Luz Marina González Y
Leuterio Tascos Y	3372.973	Comunero	Leuterio Tascos Y
María Patricia Niara T.	42731908	Animadora Pastoral	María Patricia Niara T.
Gloria Esteban Y.	43281814	Coordinadora Mujeres	Gloria Esteban Y.
Luz Cecilia Tascos G	43282169	Consejera	Luz Cecilia Tascos G
Hilma Bujarrán Campa	42732587		Hilma Bujarrán Campa

Sananda?



RESGUARDO INDÍGENA KARMATA RUA CRISTIANA JARDÍN-ANDES ANTIOQUIA

RESOLUCIONES INCORA 068 de 1.995 y 037 de 2.001
NIT 800 224 198 -3

ACTIVIDA:

FECHA: 06-25/2016

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CARGO	FIRMA
Dario Velez T	15521842			Dario Velez T
Sindy Johanna P T	98123014995			Sindy
Andrés Andrés Jarama	1027882256		participante	Andrés
Wilson Gonzalez y	15.584922		Deportista	Wilson Gonzalez
Leidy Juliana Martinez Velez	1038811697		participante	Leidy Juliana
Gilberto Gonzalez Velez	3493065		participante	Gilberto Gonzalez
Maria Matilde P. Y	1032097423		participante	Maria Matilde P. Y
Juan Carlos Tascón	1034322885			Juan Carlos Tascón
José Luis Panchi B	15534099			José Luis P.
Felipe Juan Lanquar T	1027886514			Felipe
Elkin Cortes	1057323921		vice presidente deportivo	Elkin C
Aracely Barrantes J.	3669689		laibana	Aracely
Leidy Allan Jarama C	15526824			Leidy Allan Jarama
Ma. Omaira Gonzalez Y.	43285069		Docente	Ma. Omaira
Nicky del S Corupea L	1027885425		participante	Nicky Corupea L
Paula Andrea Panchi T	1007361779		participante	Paula Andrea Panchi
Yilmar Gonzalez Barrantes	1007.882.615	3145053.577	participante	Yilmar
Diana Tascón y Jarama	1027886503			Diana Tascón
Alba Liliana Vaquero	1027880.848			Alba Vaquero

Departamento de Antioquia,
Miércoles 14 y jueves 15 de septiembre de 2016

A
Pueblos Nativos
Jueces de la República
Habitantes de "El Prodigio"
Amigos y Cercanos

Previo a estos días, vividos en "El Prodigio" del Municipio de San Luis, bajo el llamado de los Mayores Espirituales, se realizó trabajo mambeando dos sesiones de dos noches.

De la Investigación, Médicos Tradicionales Jaibaná y el Cabildo Resguardo Indígena, suscriben y reclaman Protección Espiritual y Medicinal de la Cuenca del Río Samaná o: Río que Va Delante De; en lengua Kumbra Antigua (Dialécto del Origen Emberá). La petición se hace al Tribunal Administrativo de Bogotá.

Los Mayores Espirituales, piden en la investigación, celebrar Rito de Activación en Caverna de: Azul, Petroglifo Guardián de la Puerta del Territorio Nutabe y Yamesie; quienes habitaron lo que hoy se conoce como Cuenca del Río Samaná Norte.

Se celebra el rito, dirigido por el EmberáJaibaná, Médico Tradicional: Andrés Tamanís; de nombre espiritual Shakrí; con acompañamiento de otro mayor, las madres, alguaciles, la Chicha y las nuevas generaciones, como se había pedido en la investigación.

El miércoles en la noche se hizo presentación a los espíritus de todos los presentes para el acto, se prendió fuego ceremonial, mambeó, tomó chicha y descansó. Se preservó el fuego al salir el sol. Luego de bañar en arroyo que rodea la Caverna de Azul, iniciamos rito: el ayuno, las plantas, el fuego, el incienso, el tabaco y la Yaruna (Coca), fueron la apertura del acto y saludo a los pueblos Nutabe y Yamesie. El Mayor que dirige, termina de saludar, transcurre la práctica

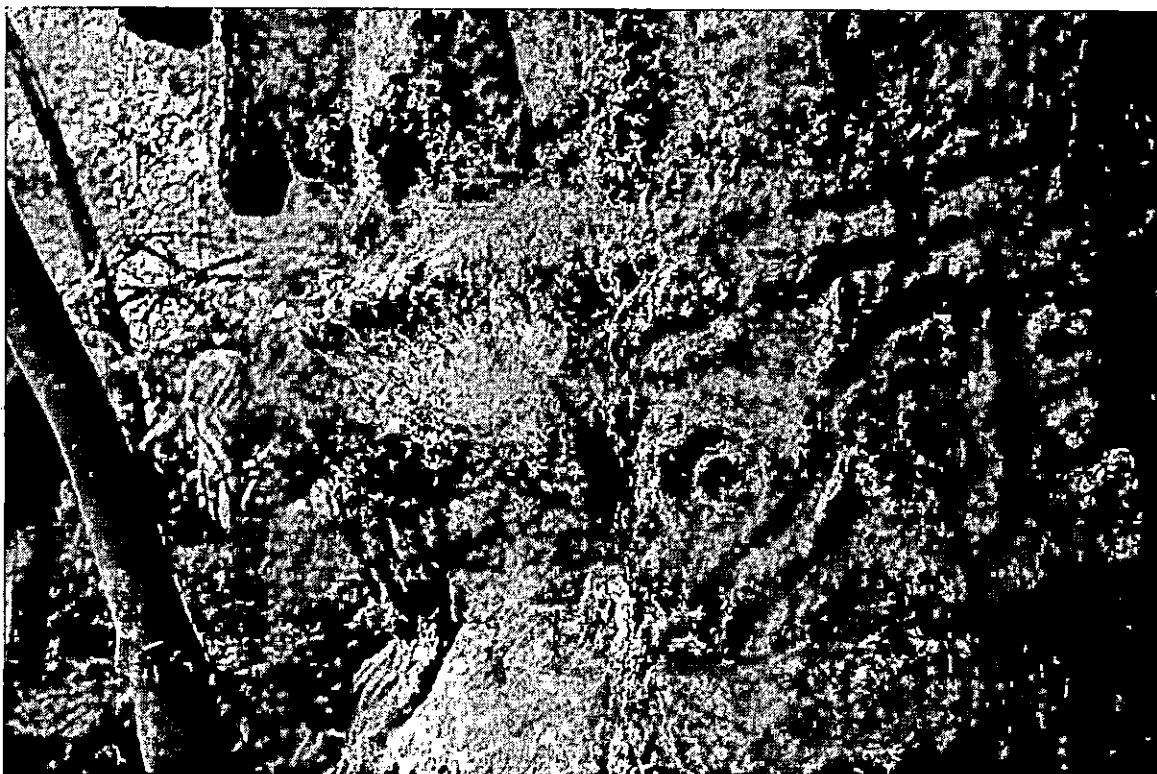
hasta el cierre; se revela por traducción simbólica, la representación del Guardián de esa Caverna y la Llave de la Cuenca, un petroglifo de Mitología develado de nombre *Azul*: Pez del Agua, Pez del Cielo; que por líneas y formas talladas, dibuja mapa de este territorio. La lectura se realiza desde la Simbología Emberá, pueblo sucesor de los Nutabe y Yamesies, *Pueblos del Agua*.

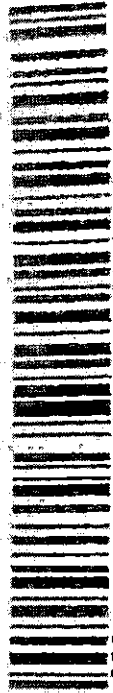
Se pide continuar con el rito río abajo en el momento más preciso, para cerrar la Invocación de Protección de la Cuenca. La investigación e intercambio del Potencial Botánico y Medicinal del Pueblo Emberá en esta cuenca, seguirá estudiándose para la formación y uso por las nuevas generaciones.

Para la pedagogía de la comunidad perteneciente al Cabildo Resguardo, se presentará exposición fotográfica de la experiencia, con traducción en lengua nativa.

Juan Ceballos

Asistente





ANCA

Radicación 2016062270-1-000
Fecha 2016-09-29 09:29 PRO 2016092270
Anexo: NO Adjuntos: NO Folios: 2
Remite: ATMO15957 FUNDACION YUMANA

Bogotá, Septiembre de 2016

Doctor
RODRIGO SUÁREZ CASTAÑO
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
E. S. D.

Asunto: Solicitud Nulidad de Licencia Ambiental. Expediente LAM 4697

Reciba un cordial saludo,

En aras de cumplir con el requisito de procedibilidad del artículo 144 de la Ley 1437 de

ANLA



Radicación 2016062270-1-000

Fecha: 2016-09-29 09:29 PRO 2016062270

Nexos: NO Adjuntos: NO Folios: 2

Emitente: ATM015957 FUNDACION YUMANA

ATALES